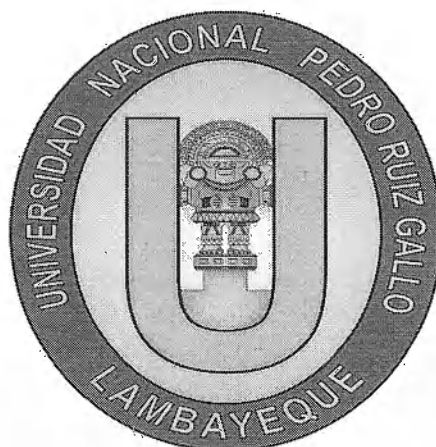


UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRIA CON MENCIÓN EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN
DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL



www.mochilaneegra.com

Título: “La ausencia del control judicial de oficio y sus consecuencias sobre el derecho al plazo razonable durante la investigación preparatoria dirigida por Fiscalía en los procesos comunes tramitados en el juzgado de Investigación preparatoria de Imaza. Años 2015-2018”.

Investigador:

Bach. Randall Arquimedes Lamadrid La Rosa

Asesor:

Dr. Freddy Hernández Rengifo

Lambayeque, marzo del 2024.

(Fecha de sustentación: 18/12/2023).

La ausencia del control judicial de oficio y sus consecuencias sobre el derecho al plazo razonable durante la investigación preparatoria dirigida por fiscalía en los procesos comunes tramitados en el juzgado de Investigación preparatoria de Imaza. Años 2015-2018.



Bach. Randall Arquimedes
Lamadrid La Rosa
Autor



Dr. Freddy Hernández Rengifo
Asesor

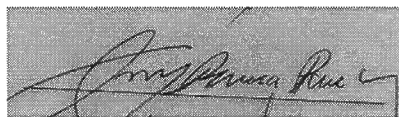
Tesis presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para optar el grado académico de MAESTRO EN DERECHO CON MENCION EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL

Aprobado por:



Mag/Dr. Ezequiel Baudelio Chavarry Correa

Presidente del jurado



Mg/Dr. Juan Manuel Rivera Paredes

Secretario del jurado



Mg/ Dr. Leopoldo Izquierdo Hernández

Vocal del jurado



Recibo digital


Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Randall Lamadrid La Rosa
Título del ejercicio: Maestrías y Doctorados
Título de la entrega: La ausencia del control judicial de oficio y sus consecuencias...
Nombre del archivo: Randall_Lamadrid_La_Rosa_Tesis.docx
Tamaño del archivo: 368.55K
Total páginas: 88
Total de palabras: 18,535
Total de caracteres: 102,617
Fecha de entrega: 21-ago.-2023 11:59a. m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega: 2149010288

1

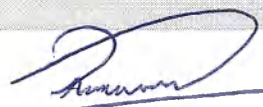
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRIA CON MENCIÓN EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL

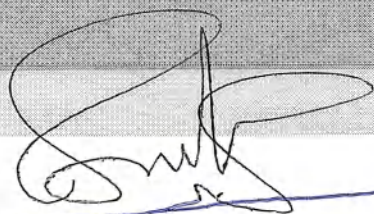


Título: "La ausencia del control judicial de oficio y sus consecuencias sobre el derecho al plazo razonable durante la investigación preparatoria digitalizada por finalista en los procesos cuerneca tramitados en el juzgado de investigación preparatoria de Iquitos. Años 2015-2018".

Investigador:
Duch. Randall Lamadrid La Rosa
Asesor:
Dr. Freddy Hernández Rengifo
Lambayeque, agosto del 2023

Derechos de autor 2023 Turnitin. Todos los derechos reservados.


Randall Lamadrid La Rosa
TesisTa


Freddy Hernández Rengifo
DNI
Asesor 17450122

CONSTANCIA DE VERIFICACION DE ORIGINALIDAD

YO, FREDDY HERNÁNDEZ RENGIFO, usuario revisor del documento titulado:

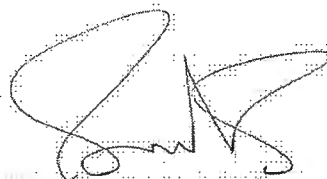
"La ausencia del control judicial de oficio y sus consecuencias sobre el Derecho al Plazo Razonable durante la Investigación preparatoria dirigida por Fiscalía en los procesos comunes tramitados en el juzgado de Investigación Preparatoria de IMAZA. Años 2015-2018"

Cuyo autor es RANDALL ARQUIMEDES LAMADRID LA ROSA, identificado con DNI N° 42851456; declaro que la evaluación realizada por el programa informático, ha arrojado un porcentaje de similitud de 17% verificable en el resumen de reporte automatizado de similitudes que se acompaña.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas dentro del porcentaje de similitud permitido no constituyen plagio y que el documento cumple con la integridad científica y con las normas para el uso de citas y referencias establecidas en los protocolos respectivos.

Se cumple con adjuntar el recibo digital a efectos de la trazabilidad respectiva del proceso.

Lambayeque, 23 de agosto del 2023.



FREDDY HERNÁNDEZ RENGIFO

DNI 17450122

ASESOR



RANDALL LAMADRID

LA ROSA

AUTOR

Se adjunta:

Resumen del reporte automatizado de similitudes.

Recibo digital.

La ausencia del control judicial de oficio y sus consecuencias sobre el derecho al plazo razonable durante la investigación preparatoria dirigida por fiscalía en los procesos comunes tramitados en el


INFORME DE ORIGINALIDAD

17%	17%	8%	7%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.uss.edu.pe Fuente de Internet	2%
2	hdl.handle.net Fuente de Internet	2%
3	qdoc.tips Fuente de Internet	2%
4	idoc.pub Fuente de Internet	1%
5	pdfcookie.com Fuente de Internet	1%
6	repositorio.usanpedro.edu.pe Fuente de Internet	1%
7	Submitted to Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Trabajo del estudiante	1%

tesis.ucsm.edu.pe


Freddy Hernández Lengua
DNI 47450129

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

033

Siendo las 10:30 horas del día dieciocho de diciembre del año Dos Mil veintitres, en la Sala de Sustentación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, se reunieron los miembros del Jurado, designados mediante Resolución N° 684-2023-EPG de fecha 19/07/2023, conformado por:

D^a. Ezequiel Baudelio Chavarro Conesa PRESIDENTE (A)
M^g. Juan Manuel Pineda Paredes SECRETARIO (A)
M^g. Leopoldo Yzquierdo Hernández VOCAL
D^a. Freddy Widman Hernández Rempifo ASESOR (A)

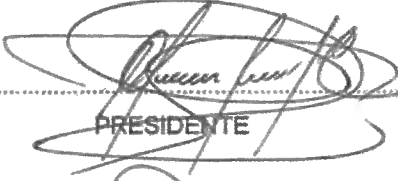
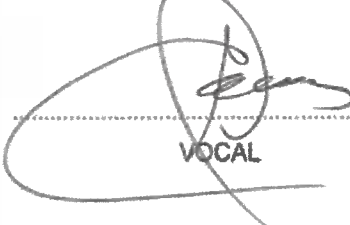
Con la finalidad de evaluar la tesis titulada "La ausencia del Control judicial de oficio y sus consecuencias sobre el derecho al plazo razonable durante la investigación preparatoria de Iryta, años 2015-2018"

presentado por el (la) Tesista Randall Arguín Lomadrid La Rosa
sustentación que es autorizada mediante Resolución N° 7147-2023 de fecha 14/12/2023

El Presidente del jurado autorizó del acto académico y después de la sustentación, los señores miembros del jurado formularon las observaciones y preguntas correspondientes, las mismas que fueron absueltas por el (la) sustentante, quien obtuvo 17 puntos que equivale al calificativo de Bueno

En consecuencia el (la) sustentante queda apto (a) para obtener el Grado Académico de:
Maestro en Derecho con mención en Derecho Penal y Procesal Penal

Siendo las 11:55 am horas del mismo día, se da por concluido el acto académico, firmando la presente acta.


PRESIDENTE

VOCAL


SECRETARIO

ASESOR

A mi maestro:

El Dr. Alejandro Lamadrid Ubillús, incorruptible magistrado y amoroso tío, ejemplo de honestidad y de valor para todos sus sobrinos, nietos y discípulos; por ser el paradigma de la decencia fiscal e intelectual, y en fin, por no haber perdido nunca la fe en la justicia, pese a las injusticias propias de un sistema criminógeno.

In memoriam.

Agradecimiento

Al escribir este trabajo recuerdo el legado de virtud que en mi alma dejaron mis señores padres: Ruperto y Rosario. A ellos, agradecer infinitamente ese ejemplo de amor incondicional, sacrificio y heroísmo. Ellos fueron los primeros en inculcarme el amor por la justicia.

A mis amigos y profesores de la maestría UNPRG, en especial al Dr. Guillermo Piscoya, uno de los mejores procesalistas penales del norte del Perú, por haber sido siempre un estímulo continuo para sus estudiantes en el quehacer de la investigación jurídica. Fue un verdadero honor haber sido su estudiante a nivel de pre y post grado.

A mis hermanos: Ysela, Lenin, Raúl y Jhon, por su amistad fraternal. A mi hermano Jhon, por su indesmayable apoyo en la corrección metodológica. Sin ella, esta obra no tendría la calidad aceptable para un trabajo de post grado.

Índice general

Constancia de originalidad-----	iii
Reporte de similitudes -----	iv
Acta de sustentación-----	v
Dedicatoria-----	vi
Agradecimiento-----	vii
Índice general-----	viii
Índice de tablas-----	x
Índice de figuras-----	xi
Índice de anexos-----	xii
Resumen-----	xiii
Abstract-----	xiv
Introducción-----	14
Objetivos-----	17
Capítulo I: Diseño teórico-----	18
1.1.- Antecedentes de la investigación-----	18
1.2.- Base teórica-----	23
1.2.1.- Breve reflexión histórica sobre el origen y evolución del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable-----	23
1.2.2.- La evolución (e involución) del plazo razonable en la jurisprudencia nacional---	24
1.2.3.- Teorías sobre la naturaleza del plazo-----	29
1.2.4.- Bases constitucionales para una definición del plazo razonable como derecho humano-----	34

1.2.5.- Bases para sustentar al control judicial de oficio como manifestación del rendimiento constitucional del plazo razonable en el proceso penal-----	45
1.3.- Definiciones conceptuales-----	57
1.4.- Operacionalización de variables -----	59
1.5.- Hipótesis -----	62
Capítulo II.- Métodos y materiales-----	63
2.1.- Tipo de investigación-----	63
2.2.- Método de investigación-----	63
2.3.- Diseño de contrastación-----	63
2.4.- Población, muestra y muestreo-----	64
2.5.- Técnicas, instrumentos equipos y materiales de recolección de datos-----	64
2.6.- Procesamiento y análisis de datos-----	66
Capítulo III- Resultados-----	67
Capítulo IV. Discusión-----	71
Aporte de la investigación-----	79
Conclusiones-----	81
Recomendaciones-----	83
Referencias bibliográficas-----	84
Anexo I -----	87
Anexo II -----	90

Índice De Tablas

Tabla 1: Operacionalización de variables-----	60
Tabla 2: Capacidad de cumplimiento del plazo legal-----	67
Tabla 3: Intensidad de la violación del plazo legal-----	69
Tabla 4: Indicadores de funcionalidad de los apercibimientos frente a violaciones-----	70

Índice De Figuras

Figura 1: Casos judiciales distribuidos por años (2015-2018)-----	68
Figura 2: Distribución de casos por intensidad-----	69
Figura 3: Distribución de casos por eficacia-----	70

Índice De Anexos

Proyecto de ley	87
Detalle de procesos comunes. Años 2015-2018-----	90

Resumen

La investigación trata un asunto de especial relevancia en el ámbito procesal penal y en la doctrina constitucional, como es el respeto de las garantías constitucionales en el proceso penal, específicamente en la primera etapa del proceso común, su violación por parte del mismo Estado a través de sus órganos de persecución penal (Fiscalía) y el papel del juez de garantías ante la constatación de dicha vulneración. En el desarrollo del trabajo, el investigador pone en evidencia la inutilidad del mecanismo del “apercibimiento judicial” para la conclusión del plazo por parte de Fiscalía durante la investigación preparatoria, mecanismo regulado en nuestra ley procesal adjetiva.

Asimismo, a partir de un desarrollo teórico sobre el rendimiento constitucional de la garantía del plazo razonable, construye una definición particular del instituto procesal, al que denomina “control judicial de oficio” sobre la razonabilidad del plazo violado durante la investigación preparatoria, proponiendo, de *lege ferenda*, su consagración en nuestro derecho adjetivo, como única solución para mitigar la lentitud de la persecución penal durante la investigación preparatoria, y salvaguardar los derechos violados por el exceso en el tiempo de la investigación penal. La propuesta tiene la virtud de revalorizar el papel del juez de investigación preparatoria como garante de los derechos fundamentales dentro de un Estado de Derecho y en dicho contexto, propone la actuación judicial de oficio y la adopción de ciertas consecuencias procesales específicas (como el instituto de la caducidad del plazo de investigación y de la nulidad de los actos de investigación y las fuentes de prueba obtenidas) que resultan de novedad para el desarrollo teórico de este tema en la dogmática procesal nacional.

Palabras claves: Plazo razonable, control judicial, procesos comunes, derechos fundamentales.

Abstract

The investigation addresses an issue of special relevance in the field of criminal procedure and in the constitutional doctrine, as it is the respect of the constitutional guarantees in the criminal process, specifically in the first stage of the common process, its violation by the same state through of its criminal prosecution bodies (prosecutor's office) and the role of the judge of guarantees in the face of the confirmation of said violation. In the development of the work, the investigator points out the uselessness of the mechanism of the judicial warning for the conclusion of the deadline by the prosecutor's office during the preparatory investigation, a mechanism regulated in our adjective procedural law. Furthermore, based on a theoretical development on the constitutional performance of the guarantee of a reasonable time, it constructs a particular definition of the procedural institute which it calls "ex-official judicial control" on the reasonableness of the period violated during the preparatory investigation, proposing, *de lege ferenda*, its consecration in our adjective law, as the only solution to mitigate the slowness of criminal prosecution during the preparatory investigation, and safeguard the rights violated by the excess time of the criminal investigation. It raises the role of the guarantee judge as guarantee of fundamental rights within a rule of law and in such context, proposes ex-official judicial action and the adoption of certain specific procedural consequences (as the institute of the expiry of the investigation period and the nullity of the investigation acts and the sources of evidence obtained) which are new for the theoretical development of this subject in the national procedural dogmatic.

Keywords: Reasonable period, judicial control, common processes, fundamental rights.

Introducción

Actualmente, en el distrito de Imaza, provincia de Bagua (Perú), perteneciente al distrito judicial de Amazonas, se está llevando a cabo una pésima praxis fiscal y judicial respecto al manejo y control del plazo legal de la investigación preparatoria de los procesos comunes, lo cual tiene consecuencias perjudiciales directas sobre el derecho de los imputados (y demás partes) al plazo razonable de la investigación. Asimismo, la ausencia de un mecanismo legal de tutela idóneo, impide al órgano judicial activar de oficio el control judicial del plazo en casos en donde no es solicitado de parte (artículo 343° del CPP) pese a que —como veremos con los datos de la investigación— muchas veces esta ausencia de petición se debe a la inexistencia de una defensa técnica o a la cosmovisión cultural distinta del destinatario (proveniente de comunidades nativas originarias). Tampoco se encuentra regulado en nuestra legislación nacional la consecuencia (de orden netamente procesal) para corregir estos excesos, situación normativa que contribuye a agravar la afectación del Derecho fundamental del plazo razonable durante la investigación preparatoria dirigida por Fiscalía.

En tal contexto, la investigación persiguió determinar en qué medida la ausencia del control judicial de oficio afecta el Derecho fundamental al Plazo Razonable de los imputados durante la fase preparatoria de los procesos comunes del Juzgado de Investigación Preparatoria de IMAZA, durante los años 2015-2018. A partir de allí, se realizó un análisis teórico sobre el rendimiento constitucional de la garantía del derecho fundamental al plazo razonable aplicado a la investigación preparatoria del proceso común, con la finalidad de definir al instituto procesal: “*control judicial de oficio*” y proponer, de *lege ferenda*, su regulación normativa como única solución a fin de garantizar el derecho fundamental del plazo razonable de la investigación preparatoria en los procesos comunes. Colateralmente, se demostró la inutilidad del mecanismo legal del apercibimiento judicial contenido en el

artículo 143° inciso segundo del Código Procesal Penal del 2004, para evitar la vulneración del plazo razonable en dichos procesos, este extremo fue explicado en los resultados del estudio.

El capítulo I contiene el diseño teórico, el mismo que contiene cinco sub capítulos. En el primer subcapítulo desarrollo los antecedentes de la investigación, a nivel nacional e internacional, posiciones teóricas de diferentes autores sobre el estado de la cuestión.

El segundo sub capítulo contiene la base teórica, donde ubicamos una breve reflexión histórica sobre la evolución del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia peruana, además de exponer las teorías sobre la naturaleza del plazo, donde el suscrito se aparta de la ya obsoleta tesis del “no plazo” para suscribirse a la doctrina del plazo legal como acertado camino para optimizar el plazo razonable del proceso penal. Del mismo modo, este capítulo también desarrolla las bases constitucionales para una definición del plazo razonable como derecho humano, destacando al instituto del control judicial de oficio como manifestación del rendimiento constitucional del plazo razonable en el proceso penal. Finalmente, se consignan las definiciones conceptuales sobre el plazo legal, la prórroga del plazo y el plazo razonable, entre otros conceptos. En este capítulo se encuentra también la hipótesis y la operacionalización de variables.

En el capítulo II se destacan los métodos y materiales utilizados. Aquí se destacan, particularmente, el tipo de investigación, diseño de contrastación, población y muestra, técnica e instrumentos de recolección de datos, entre otros.

El capítulo III contiene los resultados, donde a través de tablas y figuras se expone los datos de casos judiciales sobre el número e intensidad de violaciones al plazo legal incurridas por Fiscalía, así como de los apercibimientos judiciales frente a estas violaciones.

En el capítulo IV se expone la discusión de resultados, donde se explica las tablas obtenidas de los diferentes años con sus correspondientes porcentuales estudiados en la base teórica. Para las **conclusiones**, hemos dado respuesta a cada uno de los objetivos. En las **recomendaciones** del estudio, hemos propuesto *de lege ferenda* la incorporación del instituto procesal del control judicial de oficio del plazo de investigación preparatoria, tal y conforme está diseñado en el proyecto de ley inserto en los anexos de este trabajo.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

A.- Objetivo general

- Determinar en qué medida la ausencia del control judicial de oficio afecta el derecho fundamental al plazo razonable durante la fase preparatoria de los procesos comunes del Juzgado de Investigación Preparatoria de IMAZA, durante los años 2015-2018.

B.- Objetivos específicos.

- Realizar un análisis teórico sobre el rendimiento constitucional de la garantía del derecho fundamental al plazo razonable aplicado a la investigación preparatoria del proceso común.
- Definir al instituto procesal: “*control judicial de oficio*” y proponer, de *lege ferenda*, su regulación normativa como única solución a fin de garantizar el derecho fundamental del plazo razonable de la investigación preparatoria en los procesos comunes.
- Demostrar la inutilidad del mecanismo legal del apercibimiento judicial contenido en el artículo 143° inciso segundo del Código Procesal Penal del 2004, para evitar la vulneración del plazo razonable en los procesos comunes tramitados en el juzgado de investigación preparatoria del distrito de Imaza, años 2015-2018.

CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO

1.1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

A. A nivel internacional

1.- (PASTOR D. R., 2004), **Argentina**. La investigación fue de tipo descriptivo- explicativa y tuvo como objetivos: *a)* Realizar un análisis dogmático acerca de la naturaleza del derecho fundamental al plazo razonable como un derecho procesal subjetivo del inculcado, así como *b)* brindar herramientas de interpretación destinadas a solucionar la violación del P.R. Los resultados obtenidos en el presente estudio fueron: Atendiendo a la naturaleza del P.R como un derecho subjetivo del inculcado, debe entenderse que, por su carácter de derecho fundamental y humano, dicha noción representa una limitación al poder penal estatal, tanto respecto al tema de la duración de los procesos como en cuanto a la necesidad de una consecuencia estrictamente procesal, si dicha duración es sobrepasada. Por esta razón, como herramientas de solución al plazo razonable se cuentan las siguientes: *a)* La consideración del plazo en unidades de tiempo determinadas previamente en la ley, lo que denomina “Plazo Legal”; *b)* La consagración de una consecuencia procesal en casos de violación del plazo razonable, esta consecuencia no puede ser otra que el impedimento estatal de seguir investigando al procesado, lo que en términos concretos implica la clausura anticipada y definitiva del proceso.

2.- (AMADO RIVADENEYRA, 2011), **Chile**. La investigación fue de tipo descriptivo- explicativa y tuvo como objetivo explicar el desarrollo jurisprudencial que ha tenido el P.R como contenido ínsito al debido proceso. Los resultados fueron: Atendiendo al desarrollo jurisprudencial del plazo razonable como derecho fundamental, no existe ninguna justificación para desconocer su cumplimiento dentro del proceso penal, aduciendo a falta de tecnología para investigar y menos aduciendo congestión procesal.

3.- (BARRAZA GONZALES, 2012). **Santiago de Chile**. Realizó una investigación que tuvo como objetivo abordar los presupuestos legales y jurisprudenciales sobre el instituto de la responsabilidad del Estado-Juez ante los casos de infracción del plazo razonable. La investigación fue de tipo descriptivo-explicativa. Los resultados destacaron el incumplimiento del Estado Chileno de incorporar a su sistema legal cláusulas que regulen expresamente la responsabilidad estatal por violación del plazo razonable. Constatación a partir de la cual se hace necesario consagrar la infracción de esta garantía como supuesto de responsabilidad estatal, debiendo el Estado indemnizar los perjuicios causados por error judicial y funcionamiento anormal del servicio judicial a los afectados.

4.- (GONZALES BERBESÍ, 2014). **Bogotá Dc, Colombia**, Realizó una investigación de tipo descriptivo- explicativa que tuvo como objetivo analizar la problemática de los procesados bajo el marco de la ley de justicia y paz colombianas, a la luz de los estándares internacionales sobre el plazo razonable. Los resultados obtenidos en el presente estudio fueron: Se validó la hipótesis propuesta concluyendo la existencia de vulneración al derecho al plazo razonable respecto al propio marco legal. Respecto al ámbito procesal, se detectó la carencia de institutos procesales idóneos para evitar su violación.

B. A nivel nacional

1.- (HUAYTA CARITA, 2018) En su tesis para maestro fija como objetivo general analizar los efectos jurídicos de la vulneración del plazo en los JIP Arequipa, año 2014. El método de investigación utilizado fue el sistemático, histórico, deductivo, y lógico. Después de las investigaciones se verificó que en los JIP no se cumple la razonabilidad del plazo, la indebida dilación de los plazos contraviene al ordenamiento jurídico, y los derechos de los sujetos procesales.

2.- (RUBIO AZABACHE, 2015). La investigación fue de tipo descriptivo- explicativa y tuvo como objetivos proponer criterios para establecer el contenido y límites del control del juez de garantías. Resulta notable la posición asumida por este autor peruano cuando, al desarrollar el último acápite de su ensayo, considera que el control de los plazos procesales puede perfectamente ser realizado por el juez de garantías, tomando en cuenta su deber de cautelar los derechos fundamentales que le asisten al imputado. Este notable autor peruano critica la equívoca exacerbación de la imparcialidad del juez de garantías respecto a la cautela de derechos fundamentales, la misma que en la praxis tribunalicia ha pasado a convertirse en una fría pasividad judicial.

3.- (VARGAS YSLA R. R., 2016) Este procesalista peruano, siguiendo al maestro argentino Daniel Pastor, ha elaborado una investigación de corte teórico, cuyo objeto implica por un lado, una construcción dogmática específica del plazo razonable como derecho fundamental de carácter procesal, y por otro lado, indaga cual sería la consecuencia jurídica idónea ante la vulneración de dicho derecho fundamental, así como su mecanismo de tutela. La investigación fue de tipo descriptivo- explicativa, al tratarse de un trabajo de corte monográfico. Pese a ello, se llega a conclusiones que resultan una novedad teórica para la doctrina nacional, al no haber sido planteadas por ningún otro autor nacional. Las conclusiones fueron: **a)** Respecto a la construcción dogmática del plazo razonable, se colige que, la propia naturaleza de derecho fundamental, implica la existencia de dos dimensiones: La primera de carácter subjetivo, como es el derecho del inculpado de ser juzgado dentro de un tiempo razonable y su abierta posibilidad de hacer valer dicho derecho dentro del proceso penal. En cuanto a su dimensión objetiva, plantea la obligación del Estado de adecuar su legislación y estructura al respeto de lo consagrado en los T.I.D.H. Ello implica, como aspecto medular, que el plazo razonable sea fijado a través de unidades de tiempo, es decir,

mediante un plazo legal, el mismo que integraría el contenido esencial del derecho fundamental, cuyo vencimiento dentro de un proceso penal constituiría (lo que él denomina) un “criterio rector indiciario” o presunción *iuris tantum* de que el plazo razonable ha sido violado. En cuanto a las consecuencias jurídicas, la mejor consecuencia para el caso de la constatación de la violación del plazo razonable no es de carácter sustantivo (medidas compensatorias, reparación *in natura* y reparación en moneda penal, esbozadas por el TEDH y la CIDH) sino de carácter procesal, a través de un sobreseimiento de carácter excepcional por pérdida de legitimidad punitiva del Estado por el quebrantamiento de un derecho fundamental. Finalmente, respecto al mecanismo de tutela, estima la programación de una audiencia de tutela del P.R, donde podría acudir el afectado, pero que no se podría llevar a cabo ante el mismo juez de I.P que violó o desconoció el plazo razonable, sino mas bien ante un juez distinto a él, quien luego de constatar el traspaso del plazo legal y luego de aplicar los criterios elaborados por la doctrina del “no plazo” (comportamiento procesal del imputado, complejidad procesal, conducta asumida por las autoridades judiciales y el grado de afectación del derecho) constatada en fin de cuentas, la vulneración al P.R ordene como primer paso, la reparación *in natura*, otorgando, por única vez y de manera excepcional un plazo final al autor de la infracción a fin de que resuelva, en definitiva, la situación jurídica del justiciable, bajo apercibimiento de que si ello no ocurriese, se tendrá por extinguida la acción penal, al haber operado su insubsistencia, disponiéndose el sobreseimiento del proceso penal.

4.- (MERCADO MAMANI, 2018) En su tesis para maestro, se plantea como objetivos: Establecer si el D° al P.R es determinado por la actuación del investigado y el Ministerio P. durante la investigación preliminar en delitos contra la Ad. Pública. El diseño es Hipotético – Deductivo. La investigación determinó que el D° al plazo R. de la investigación en un 40%

es afectado por la conducta del investigado y en un 38% por falta de cooperación interinstitucional.

1.2.- BASE TEÓRICA

1.2.1.- BREVE REFLEXIÓN HISTÓRICA SOBRE EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO A SER JUZGADO DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE

La preocupación por la lenidad judicial no es para nada reciente. Ya en la antigua Roma, los emperadores Constantino y Justiniano decretaron plazos de uno y dos años respectivamente (MOMMSEN, 1991). La Carta Magna de 1215 contiene el compromiso del rey inglés de no denegar ni retardar derecho y justicia (DARANAS PELÁEZ, 1979) En las *Siete Partidas* de Alfonso X, existe una regla de derecho, y es que el máximo de duración de los pleitos es de dos años. (ALFONSO X, 2021) Posteriormente, en la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos se consagra que: *“En todos los juicios penales el acusado gozará del derecho a un proceso rápido”*

Pero el desarrollo teórico de este derecho comienza a consolidarse con la normativa y jurisprudencia internacional de los derechos humanos, emitida a partir del holocausto que representó la segunda guerra mundial.

Así en el art. XXV de la D.A..D.D.H, contempló, por primera vez, a nivel internacional, la idea más primitiva de este derecho, al consagrar que: *“Todo individuo que haya sido privado de su libertad, tiene derecho [...] a ser juzgado sin dilación injustificada”* Posteriormente, la Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de Roma, del año 1950, consigna literalmente esta garantía en su art. 6.1. Años más tarde, en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en vigor desde 1976) reguló, también, en dos oportunidades, este derecho.

Finalmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dada en San José De Costa Rica en 1968 y en vigor desde 1978, siguiendo el modelo europeo, consagró en su

art. 7.5 que *“toda persona detenida o retenida [...] tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable”*.

1.2.2.- LA EVOLUCIÓN (E INVOLUCIÓN) DEL PLAZO RAZONABLE EN LA JURISPRUDENCIA PERUANA

a) En la jurisprudencia del T.C.

Teniendo presente la posición jurisprudencial de la Corte IDH, el Tribunal Constitucional, en la STC 00618-2005-PHC/TC, interpretando el inciso 1) del artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, enfatizó que: *“(...) el derecho a que el proceso tenga un límite temporal entre su inicio y fin, forma parte del núcleo mínimo de derechos reconocido por el sistema internacional de protección de los derechos humanos, y, por tanto, no puede ser desconocido”*.

Asimismo, en cuanto a los criterios para determinar la duración del plazo razonable, nuestro T.C, al emitir sus sentencias en los Exp. N° 618-2005-PHC/TC y N° 5291-2005-PHC/TC, ha seguido la doctrina del “análisis global de procedimiento”, desarrollada por la CIDH en los casos Genie Lacayo y Suárez Rosero, precisando los siguientes criterios de análisis: a) La actividad procesal del interesado, b) La conducta de las autoridades judiciales y c) La complejidad del asunto.

La posición sobre este tema, fue embellecida posteriormente con la RTC O 09-2009-PHC/TC donde el Tribunal subrayó la idea consistente en que no sólo “no pueden existir zonas exentas de control constitucional”, sino que “tampoco pueden haber plazos ni tiempos exentos de control”.

Esta buena praxis fue evolucionando hasta llegar a indagar cuál sería la consecuencia jurídica de la vulneración del plazo razonable. Así por ejemplo, en el caso Chacón Málaga (STC 3509-2009) ante la constatación de la vulneración del plazo razonable, el Tribunal se decantó por la solución de “*exclusión del imputado por pérdida de legitimidad punitiva*”, esto implica una prohibición del Estado de seguir procesando a una persona, por franco exceso en la duración de la causa penal, mientras que, en el caso Salazar Monroe (STC 05350-2009-PHC/TC) el Tribunal Constitucional optó por el llamado “*sobreseimiento de oficio*” soluciones que si bien, en su tiempo, fueron novedosas, no dejaron de estar libres de polémica, sobre todo por el contexto político en que fueron dadas.

No obstante, años después, el máximo guardián de la Constitución da un giro vertiginoso en su posición, al sostener en la sentencia recaída con fecha 14 de mayo del 2015, que la constatación violación del D° a ser juzgado dentro de un P.R no puede significar el archivo definitivo o la conclusión del proceso judicial siendo que la solución sería la reparación *in natura* por parte de los órganos jurisdiccionales, la misma que consiste en «emitir el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto en el plazo más breve posible.» (ARISTOTELES ROMAN ARCE PAUCAR, 2015)

Sustenta el Tribunal esta decisión en base al siguiente razonamiento:

«[...] el derecho al plazo razonable del proceso es un derecho de naturaleza inclusiva, ... Por ello, es posible que, cada vez que se determine la violación del derecho al plazo razonable del proceso, se afecte también el derecho a obtener satisfacción jurídica en un tiempo razonable de la víctima o la parte civil... De ahí la necesidad de que la consecuencia jurídica sea la emisión de la decisión que resuelva de manera definitiva la situación jurídica del procesado. Dicho con otras palabras, que el órgano jurisdiccional emita pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto en el plazo más breve posible.»

Como puede colegirse, se trata de un razonamiento entimemático y falaz, pues le falta una premisa que le dé sentido lógico y validez a la afirmación. En efecto, de la afirmación de que “*el derecho al plazo razonable sea un derecho de naturaleza inclusiva*” no sigue que por ello la consecuencia jurídica por la violación del plazo razonable sea la “*reparación in natura por parte de los órganos jurisdiccionales*”; faltaría allí una premisa intermedia que afirme que la reparación *in natura* es la mejor opción (o la más equitativa, dentro de todo el abanico de consecuencias que se han esbozado en la doctrina de los tribunales internacionales) para reparar el perjuicio ocasionado por el quebrantamiento del P.R, tanto para el imputado como para el agraviado. Es un razonamiento falaz porque parte de una premisa falsa, o al menos no comprobada: que la reparación *in natura* es la opción que repara en forma equitativa tanto a la parte agraviada como al imputado. Esta premisa es falsa porque, además, pone en la misma balanza el derecho violado al imputado y al agraviado: En el primer caso, la violación es mayor, puesto que se violentan garantías constitucionales como la presunción de inocencia, la libertad personal, la dignidad humana, el debido proceso, entre otros. En el caso de la víctima: el derecho resarcitorio (sea económico o de índole moral), como derecho estelar¹, y solo en el caso que el proceso culmine con una sentencia condenatoria. Asimismo, al incluir la satisfacción jurídica de la víctima o actor civil como derecho afectado, este razonamiento parecería olvidar que no en todos los procesos penales existen víctimas, que muchos de ellos son iniciados por motivos espurios (móviles vindicativos, intereses económicos o políticos, etc.) y por lo tanto, desconoce o no da respuesta al supuesto específico de violación del P.R en caso se procese a un ciudadano

¹ Sin excluir otros derechos que también forman parte de la dignidad del agraviado, como el derecho a la verdad, el derecho a la tutela procesal efectiva o de la debida diligencia (en casos de violencia familiar) por citar algunos.

inocente o dicho en otras palabras, cuando el caso culmine con una sentencia absolutoria íntegra (penal y civil).

Consideramos que esta es una verdadera involución en el desarrollo teórico del contenido esencial de la garantía del plazo razonable incurrida por el TC, quien ha desconocido la obligación internacional de los Estados suscribientes, de adecuar la normativa y la praxis al respeto de los derechos fundamentales, los criterios de interpretación *favor rei*, el principio de legalidad procesal, el principio de supervisión constitucional, además de olvidar criterios básicos como la naturaleza del plazo, el mismo que según nuestro sistema normativo solo puede estimarse en base al calendario jurídico (ver artículo 142° del CPP del 2004 en concordancia con los artículos 122° y 124° del T.U.O de la L.O.P.J) y no de forma arbitraria por parte de las autoridades judiciales.

b) En la jurisprudencia del Poder Judicial

La Casación N° 309-2015, Lima, de fecha 29 de marzo del 2016, consagró como doctrina vinculante que el requerimiento de prórroga del plazo de investigación debe realizarse bajo un control en audiencia. (Fundamento jurídico vigésimo tercero). A su turno, la Casación 134-2012, Áncash, al desarrollar el tema de la duración de la investigación preliminar, también define los contornos de los límites del plazo, consagrandolo como doctrina vinculante la caducidad del plazo para investigar cuando el fiscal no ha cumplido con solicitar oportunamente una prórroga al despacho judicial.

Esta jurisprudencia vinculante puede ser aplicada por los jueces de garantías, al momento de resolver peticiones extemporáneas de los fiscales que, en su oportunidad, no diseñaron su

proceso como complejo y que, a última hora pretenden obtener una prórroga de un plazo que ya precluyó como investigación simple. Se trata en tal sentido de la consagración del instituto de CADUCIDAD –institución originaria del proceso civil- como forma de hacer efectiva la garantía en estudio.

No obstante, en caso la prórroga se presenta antes de la culminación del plazo fijado al inicio de la investigación, el juez de garantías deberá de convocar a una audiencia con presencia de ambas partes procesales a fin de debatir los presupuestos de la complejidad del caso, que sustenten o no la concesión de una prórroga. De no existir argumentos suficientes, el juez deberá de ordenar al fiscal, la conclusión de su I.P, conforme lo dispone el art. 343° inciso tercero del C.P.P.

Como se deduce de la CASACIÓN antes mencionada, en ningún caso pueden ser admitidas prórrogas de plazo de investigación cuando este ya se encuentre vencido, lo que forzará al fiscal a estudiar mejor su caso desde la génesis de las primeras diligencias. Ahora bien, si somos coherentes con el principio de preclusión, aludido en esta jurisprudencia, tampoco podrán hacerse valer medios probatorios y fuentes de prueba obtenidos con posterioridad al vencimiento del plazo inicialmente fijado en la disposición de formalización de I.P, de estimarlos se estaría violando el principio de igualdad procesal que prescribe:

“Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este Código. Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia.” (Art. I inciso 3 del Título Preliminar del Código Procesal Penal del 2004)

En ese sentido, la praxis judicial resulta violatoria de este principio rector, pues muchas veces se admiten pruebas de última hora al fiscal y sin embargo, a la defensa técnica se le

desestima pruebas ofrecidas fuera de los plazos legales, desconociendo que las partes intervienen en iguales condiciones de lucha dentro del proceso y no se les puede restringir o discriminar favoreciendo a una de las partes.

1.2.3.- TEORÍAS SOBRE LA NATURALEZA DEL PLAZO.

a) La doctrina del “no plazo”

Esta es la doctrina dominante, tanto a nivel de la jurisprudencia de los tribunales internacionales, como nacionales. Fue creada por el TEDH en la sentencia del caso *Stogmüller* (1960) y luego fue recepcionada por la jurisprudencia de los tribunales europeos y de la misma C.I.D.H. Según esta teoría, el “plazo razonable” no es un plazo, pues no puede ser estimado en días, semanas o meses de manera exacta, sino que debe ser evaluado caso por caso por parte de la autoridad judicial, una vez finalizado todo el proceso penal, mediante criterios tan abstractos como ambiguos (complejidad del asunto, conducta del imputado, diligencia de las autoridades) Lo llamativo de esta teoría son sus consecuencias para el Estado de Derecho, pues la constatación de la vulneración no conlleva directamente a su sanción en el mismo proceso, sino más bien a una compensación de tipo económica (soluciones compensatorias civiles) de tipo penal (a través del indulto, pero también en la determinación de la pena, en el caso el proceso termine en condena) la nulidad y el sobreseimiento subsidiario. Esta teoría tampoco nos dice el momento específico en el cual podemos estimar violado el plazo razonable.

Con esta teoría, ya obsoleta en un Estado de Derecho Constitucional, se renuncia a elementales garantías, como el principio de legalidad procesal (que impone que cualquier medida que vulnere la libertad debe estar taxativamente estipulada en la ley) el principio de presunción de inocencia (en casos de reo en cárcel, por ejemplo) la seguridad jurídica y la predictibilidad de decisiones (pues la razonabilidad del plazo debe analizarse *caso por caso*).

b) La doctrina del plazo legal

Esta teoría estima que el plazo debe ser predeterminado por ley, es decir, legislativamente debe regularse el plazo para cada proceso y en caso de constatarse su vulneración, deducirse consecuencias estrictamente procesales. Como seguidores de esta teoría tenemos a Daniel Pastor en Argentina y a Rubio Azabache, Cerna García y Vargas Ysla en Perú.

Así, el procesalista argentino Daniel Pastor, considera que no puede haber otro plazo razonable dentro del proceso penal que el plazo legal y que no puede haber una mejor consecuencia para la constatación de la violación de esta garantía que la clausura anticipada y definitiva del proceso por pérdida de legitimidad de la persecución penal, lo que se concreta bajo una excepción que él llama *perentoria por falta de acción* y que conduce inevitablemente al sobreseimiento del proceso, a favor del imputado y sin decisión sobre el fondo. (PASTOR D. R., 2002, pág. 618)

Esta posición ha tenido repercusión en la doctrina nacional. Así autores, como el procesalista Vargas Ysla consideran que la naturaleza del plazo razonable como derecho humano de carácter procesal implica que su plazo sea fijado a través de unidades de tiempo, es decir, mediante un plazo legal, el mismo que integraría el contenido esencial del derecho fundamental, cuyo vencimiento dentro de un proceso penal constituiría (lo que él denomina)

un “criterio rector indiciario” o presunción *iuris tantum* de que el plazo razonable ha sido violado. En cuanto a las consecuencias jurídicas, la mejor, para el caso de la constatación de la violación del P.R no es de carácter sustantivo (medidas compensatorias, reparación *in natura* y reparación en moneda penal, esbozadas por el TEDH y la CIDH) sino de carácter procesal, a través de un sobreseimiento de carácter excepcional por pérdida de legitimidad punitiva por infracción a un derecho fundamental. Finalmente, respecto al mecanismo de tutela, estima la realización de una audiencia de tutela del plazo razonable, donde podría acudir el afectado, pero que no se podría llevar a cabo ante el mismo juez de I.P que desconoció el plazo razonable, sino mas bien ante un juez distinto a él, quien luego de constatar el traspaso del plazo legal y luego de aplicar los criterios elaborados por la doctrina del “no plazo” (comportamiento procesal del imputado, complejidad procesal, conducta asumida por las autoridades judiciales y el grado de afectación del derecho) constatada en fin de cuentas, la vulneración al P.R ordene como primer paso, la reparación *in natura*, otorgando, por única vez y de manera excepcional un plazo final al autor de la infracción a fin de que resuelva, en definitiva, la situación jurídica del justiciable, bajo apercibimiento de que si ello no ocurriese, se tendrá por extinguida la acción penal, al haber operado su insubsistencia, disponiéndose el sobreseimiento del proceso penal.

Por su parte, el profesor Rubio Azabache estima que el control de los plazos procesales puede perfectamente ser realizado por el juez de garantías, tomando en cuenta su deber de cautelar los derechos fundamentales. Para clarificar la situación expone el siguiente ejemplo: *“no podríamos imaginar que, en un partido de fútbol, el árbitro (tercero imparcial) tenga que esperar a que se le reclame para que sancione al jugador que cometió una infracción. Ello traería como consecuencia la pérdida del control del partido y la exacerbación de jugadores y espectadores”* (RUBIO AZABACHE, 2015, pág. 181) Con este notable ejemplo, este autor peruano critica la equívoca

exacerbación de la imparcialidad del juez de garantías respecto a la cautela de derechos fundamentales, la misma que en la praxis tribunalicia ha pasado a convertirse en una fría pasividad judicial.

Del mismo modo, CERNA GARCÍA, estima que lo más saludable, ante la omisión normativa del control oficial de plazos a nivel del artículo 343 del CPP del 2004, es optar por su deducción a partir de las funciones reconocidas al juez de garantías en el artículo 323° del CPP (donde también se consagra como función del juez de la I.P “controlar el cumplimiento del plazo”); aunque dicha potestad también se colige de una interpretación sistemática con otras normas del ordenamiento jurídico, que autorizan al juez de garantías proceder de oficio allanando un obstáculo (inactividad procesal) y convocar de oficio a una audiencia de control. (CERNA GARCÍA, 2015).

Estamos de acuerdo con esta posición, ya que la teoría del “no plazo”, resulta anacrónica en el moderno Estado de Derecho Constitucional. Si queremos que nuestro sistema penal garantice los derechos de los justiciables, debemos procurar que toda medida coercitiva que afecte o amenace la libertad se encuentre previamente regulada por imperio de la ley y no por la discreción de los operadores jurídicos.

c) Postura personal: Una “tercera vía”.

Como dijimos, estamos de acuerdo con la doctrina del plazo legal (el plazo de “licitud” en el que se desarrolla el proceso debe ser fijado en unidades de tiempo) No obstante, discrepamos con la posición de los autores reseñados, en cuanto a la consecuencia procesal que predicen respecto a la vulneración de los plazos (sobreseimiento por pérdida de legitimidad punitiva para perseguir al encausado, inicialmente planteada por PASTOR en

Argentina y luego seguida por algunos penalistas nacionales) En un país como el nuestro, plagado de corruptelas y de influencias políticas, tal postura sería muy bien manejada por los grupos de poder a fin de conseguir la impunidad de diferentes personajes del entorno político y económico. Por otro lado, la reparación *in natura* que postula Vargas Ysla, resulta igualmente inoperante, ya que deja sin respuesta el momento en que el plazo fue violado o que dejó de ser razonable. En un país donde a diario se cometen tantas injusticias y abusos, parece haberse olvidado el valor central que ocupan los jueces respecto a la defensa del Estado de Derecho y la constitucionalidad del sistema jurídico. Por tal motivo, la posición personal de este investigador, es estructurar y orientar el sistema legal, delegando en los jueces, bajo responsabilidad, el último filtro de control y respeto a los derechos fundamentales, revalorizando de esta manera su papel de jueces de garantías. En ese sentido, el proyecto de ley que se anexa a este trabajo, contiene modificaciones legales que regulan, tanto el procedimiento del instituto al que yo llamo “*control judicial de oficio respecto al plazo razonable*”, como de las consecuencias de orden netamente procesal (y no sustantivas) que deberá de dictar el juez en caso constate la violación de plazos y que, en esencia, se basan en el instituto de la caducidad y de la nulidad de actuaciones de investigación llevadas a cabo fuera del plazo razonable. Sostengo además, que el control del plazo del proceso común debe ser llevado preferentemente en su primera etapa (investigación preparatoria) puesto que la experiencia enseña que es en esta etapa donde existe mayor proclividad a vulnerar el plazo por Fiscalía, quien por lo general no diseña una estrategia del caso adecuada, a fin de recabar las fuentes de prueba en un tiempo razonable. Estas omisiones se dejan sentir posteriormente, en el tiempo total del proceso común.

Así, luego de detectado el exceso del plazo legal (que para Vargas Ysla constituye un primer criterio indiciario de la vulneración del P.R) el juez de investigación preparatoria, aun de

oficio deberá de programar, bajo su responsabilidad, una audiencia de control de plazos, donde como primer paso, deberá determinar, previo debate, el momento en el que el plazo fue violado (momento que, naturalmente, se ubica entre la fecha de la trasposición del plazo legal y la fecha de la audiencia) para luego sancionar las consecuencias estrictamente procesales de dicha vulneración, combinando los institutos de la caducidad y de la nulidad de actos de investigación. Sobre ello, volveremos con mayor detalle en el acápite 1.2.5 de esta base teórica, pero lo esencial aquí es dejar sentado que con la modificatoria que se propone, la consecuencia procesal estelar de la vulneración del P.R por parte de Fiscalía, no solo acarreará una simple responsabilidad administrativa, sino que conllevará a la exclusión de fuentes de prueba por declaratoria de nulidad e insubsistencia de los actos de investigación llevados a cabo fuera del plazo legal.

1.2.4.- BASES CONSTITUCIONALES PARA UNA DEFINICION DEL PLAZO RAZONABLE COMO DERECHO HUMANO

A.- PRIMERA BASE: EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD

El artículo 55° de la Const. Política del 93° prescribe que «*los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional*». El texto redactado en dichos términos, deja duda sobre si los tratados sobre DDHH tienen o no rango constitucional, cuestión que la Const. del 79, sí reconocía de manera expresa en su artículo 105.

Esta duda sin embargo, puede ser superada si nos atenemos a un criterio de interpretación sistemática de nuestras normas constitucionales. En efecto, el artículo 3° de nuestra Carta magna, deja abierta la posibilidad de incluir otros derechos fundamentales “*de naturaleza*

análoga o que se fundan en la dignidad del hombre” e inclusive otros derivados del Estado democrático de Derecho.

Justamente, alguno de los derechos que no se encuentran taxativamente contemplados en la Constitución pero que forman parte del derecho nacional (conforme al art. 55º ya invocado *ut supra*) son los derechos reconocidos por el Estado peruano al suscribir los tratados de DDHH. No cabe duda entonces que estos derechos humanos detentan rango constitucional, máxime cuando, de conformidad con lo dispuesto en la cuarta disposición final y transitoria de nuestra Constitución Política, *«las normas relativas a derechos y libertades que la Constitución reconoce, se interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por el Perú»*

En dicho contexto, nuestro TRIBUNAL CONSTITUCIONAL peruano, en los expedientes acumulados N.º 00025-2005-PI/TC y N.º 00026-2005-PI/TC ha señalado que *«los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado peruano es parte integran el ordenamiento jurídico. Dichos tratados no sólo conforman nuestro ordenamiento sino que, además, detentan rango constitucional»*. (CASO PROFA II, 2006)

Lo dicho implica que las normas relativas a derechos humanos contenidos en tratados aprobados y ratificados por el Perú deben ser estimadas como parámetro de valoración judicial al ser verdaderas guías de interpretación constitucional, lo que es lo mismo decir, que este tipo de normas forman parte del bloque de constitucionalidad de nuestro sistema jurídico.

El llamado “*bloque de constitucionalidad*” está conformado por aquellas normas que sirven como parámetro para juzgar la constitucionalidad de las leyes, entre ellas están las leyes orgánicas y las de desarrollo constitucional (ver art. 79 del Código Procesal Constitucional, en concordancia con el art. 106º y la octava disposición final y transitoria de la Constitución

Política) pero también los derechos que se derivan de los derechos fundamentales explícitos; por citar algunos: el derecho a la verdad, el derecho al agua potable, etc.

B.- SEGUNDA BASE: EL MODELO DE ESTADO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Según el artículo 43° de nuestra Constitución Política, el nuestro es un Estado democrático de derecho. Asimismo, según el artículo 38° de la misma Carta Magna, todos los ciudadanos en general tenemos el deber de respetar, cumplir y defender la Constitución. En ese contexto, el principio del Estado constitucional de Derecho reclama que toda la actividad estatal esté regulada (autorizada, pero por ello también limitada) por ley. *«Una de estas actividades —la de mayor peligro para los derechos individuales— es el ejercicio del poder penal, el cual no puede ser llevado a cabo sin previa autorización legal»* (PASTOR D. R., 2004, pág. 63)

La repercusión de este principio en el proceso penal implica que ni el límite máximo de prolongación de un proceso ni las consecuencias jurídicas de sobrepasarlo pueden ser definidos por la ley de un modo abierto. Por esta razón, es que autores como PASTOR opinan que, *«establecer los límites de este poder a los jueces, sería tan ingenuo como pedirle al lobo y no al pastor, que cuide las ovejas»* (PASTOR D. R., 2004, págs. 62, 63.)

En ese contexto, el mismo TC, en el conocido caso SALAZAR MONROE, ha consagrado que:

“La naturaleza y características del Estado Constitucional, así como las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en materia de derechos humanos, exigen la necesidad insoslayable de que la justicia sea impartida dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas o demoras injustificadas” (CASO SALAZAR MONROE, fundamento 12, 2010)

Este principio de Estado Constitucional, si bien tiene diferentes ángulos y sub principios, existen dentro de ellos algunos que vale la pena resaltar por su aplicación respecto al plazo razonable. Vale resaltar alguno de ellos:

- **Principio de dignidad humana:** En el R.N. N° 959-2020-NACIONAL nuestra Corte Suprema enseña que el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable *no solo es una manifestación implícita del derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva, sino que también se funda en el respeto a la dignidad de la persona humana*. En ese sentido, el profesor peruano Vargas Ysla, considera que la prolongación indefinida del proceso vulnera la dignidad humana del encausado, ya que el plazo razonable, más que un derecho fundamental no enumerado, es un derecho humano autónomo, universalmente reconocido y protegido por los tratados internacionales sobre la materia (VARGAS YSLA R. , 2016). No resulta pues, casual, que nuestra Constitución Política del 93 reconozca a la dignidad humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado. Esto implica que ninguna aspiración política puede ser proyectada como un fin en sí mismo, sino como un medio de realización de los derechos fundamentales, esencialmente, la libertad y dignidad del ser humano.
- **Principio de legalidad y *nulla coactio sine lege*:** El maestro español Santiago MIR PUIG nos dice que el principio de Estado de Derecho impone el postulado de un sometimiento de la potestad punitiva al Derecho, lo que dará lugar a los límites derivados del principio de legalidad (MIR PUIG, 2007). Este principio de legalidad, en su sentido clásico, desde su creación hasta tiempos recientes, ha sido entendido siempre desde el ángulo del derecho penal material, en sus cuatro aspectos: garantía criminal (*nullum crimen sine lege*) garantía penal (*nulla poena sine lege*) garantía

jurisdiccional y garantía de ejecución. Para ostentar estas garantías, la norma jurídica debe cumplir con la triple exigencia de *lex praevia*, *lex scripta* y *lex stricta*.

No obstante, nuevas voces se han levantado en pos de una extensión de esta legalidad material hacia el derecho procesal. Así, por ejemplo, el maestro argentino JULIO MAIER, desde fines del siglo pasado, ha defendido una teoría, según la cual, el principio de legalidad penal, con todas sus derivaciones (prohibición de analogía, retroactividad, garantía de ley escrita y previa, etc) debe ser aplicado con los mismos alcances al derecho procesal penal, sobre todo en el campo de las medidas de aseguramiento (prisión preventiva, embargos) al derecho probatorio (legalidad de la prueba) al derecho de defensa, etc (MAIER J. B., 1996) En ese sentido, como enseña MAIER, en el régimen procesal penal de un Estado de Derecho, la ley es la única fuente de sus normas (MAIER J. B., 1996).

Ahora bien, entendiendo que la persecución penal estatal representa ya, con prisión provisional o sin ella, una pena de sospecha, o como diría FERRAJOLI una “pena de proceso” (FERRAJOLI, 1995, pág. 730 y sgtes), entonces, todos los actos procesales y el proceso penal en sí mismo deben estar sometidos a la ley.

Surge de esta manera el llamado principio de “*nulla coactio sine lege*” que no es más que una derivación del principio de reserva estricta de la ley y que representa una suerte de principio de legalidad procesal en sentido estricto (aplicación de las exigencias del principio de legalidad material a las reglas del procedimiento) principio que ya se encuentra positivizado en nuestra legislación, si nos atenemos a una lectura del artículo VII inc. 3 del T.P del CPP, en donde se prescribe que “*la ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales,*

será interpretada restrictivamente...” Nótese que al referirse a la expresión “la ley que coacte la libertad personal”, el legislador del 2004 reconoce, de un modo explícito que la libertad del imputado solo puede ser limitada por la ley, y por otro lado, la exigencia de que la interpretación deba ser restrictiva, prohíbe la analogía en tanto no favorezca la libertad o el ejercicio de derechos.

Ahora bien, entendiendo que la sola instauración y desarrollo de un proceso penal en contra de una determinada persona presupone ya, una sensible limitación a la libertad personal por el carácter coercitivo que entrañan los actos que en él se desarrollan (principalmente las medidas de coerción real y personal) de ello sigue que las reglas legales que regulan la existencia, naturaleza y posible ejecución de estas medidas de coerción resultan igualmente aplicables al proceso penal en su totalidad, puesto que la existencia del proceso es presupuesto de cada una de estas medidas.

Uno de estos límites es el tiempo, puesto que es en el decurso de un determinado tiempo que se desarrolla el proceso penal y sus actos de coerción.

- **Seguridad jurídica:** El procesamiento de una persona, excediendo los límites regulares de su persecución, es decir, prolongando irrazonablemente los límites del tiempo, afecta otro de los imperativos centrales de todo Estado de Derecho, como es la llamada “*seguridad jurídica*”, la misma que opera como garantía en contra de la arbitrariedad estatal, llámese administrativa, política o judicial². En tal sentido, nuestro constitucionalista GARCÍA TOMA nos dice que la seguridad jurídica como fin, opera como instrumento al servicio de un valor: la justicia (GARCÍA TOMA,

² Las manifestaciones más importantes de este principio son la cosa juzgada y el *ne bis in idem*. PASTOR, Ob. Cit. Pág. 387.

2021). En tal orden de ideas, el ser sometido a un proceso penal sin fecha de término, genera incertidumbre y desde el plano subjetivo de los derechos ciudadanos, constituye un atentado contra la predictibilidad de las decisiones y actuaciones del poder público.

Por tanto, la duración del proceso penal, en cuanto pena de proceso, debe ser determinada por la ley como cualquier otra pena, y solo en caso de vulneración de la prescripción legal en un determinado proceso, le estaría permitido al juez intervenir, en tanto y en cuanto lo haga para corregir y sancionar dichas vulneraciones, en su calidad de juez de garantías, conforme así tendremos oportunidad de desarrollar en los acápites que siguen.

- **Debido Proceso:** Siendo la realización de la justicia una aspiración esencial del Estado democrático y social, —conforme así se desprende de una lectura al artículo 44° de nuestra Constitución Política— su ejercicio no puede estar exento de límites, entre los cuales se cuenta la protección de los derechos fundamentales y las libertades consagradas en la Constitución. Uno de estos derechos esenciales es el DEBIDO PROCESO, reconocido además como principio de la función jurisdiccional en el artículo 139° de nuestra Carta Magna. En esta línea, nuestro TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, siguiendo la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enseña que el derecho al plazo razonable es propiamente una “manifestación implícita” del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva y, en tal medida, se funda en el respeto a la dignidad de la persona humana (01014-2011-PHC/TC, 2011) Más adelante, en el caso CHACON MÁLAGA, fundamento jurídico 19, nuestro Tribunal Constitucional invoca el

artículo 55 y la cuarta disposición final y transitoria de la Carta Política del 93, así como el art. 8 de la CADH, para reafirmar el carácter del plazo razonable como manifestación implícita del debido proceso (CHACON MÁLAGA, 2009).

De la misma forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, en su fundamento 74, invoca al plazo razonable como una de las manifestaciones del debido proceso legal, conforme así se encuentra previsto en el artículo 8 de la CADH (CASO GENIE LACAYO VS NICARAGUA, 1997).

- **Principio de presunción de inocencia:** Nuestro Tribunal Constitucional, en el caso GLEISER KATS, fundamento jurídico OCTAVO, estima que:

«El contenido principal de la presunción de inocencia comprende la interdicción constitucional de la sospecha permanente. De ahí que resulte irrazonable el hecho que una persona esté sometida a un estado permanente de investigación fiscal o judicial»
(SAMUEL GLEISER KATZ, 2007).

C.- TERCERA BASE: LA JERARQUÍA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE D.D.H.H

En dicho contexto, nuestro TRIBUNAL CONSTITUCIONAL peruano, en los expedientes acumulados N. ° 00025-2005-PI/TC y N.° 00026-2005-PI/TC ha señalado que *los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado peruano es parte integran el ordenamiento jurídico. Dichos tratados no sólo conforman nuestro ordenamiento, sino que, además, detentan rango constitucional*, por cuanto nuestra Carta Magna en su artículo tercero, deja abierta una cláusula “*numerus apertus*” para incluir otros derechos de naturaleza “*análoga*” o “*que se fundan en la*

dignidad del hombre”. Para el Tribunal, esta naturaleza análoga a los derechos constitucionales tiene como fuente los tratados internacionales de derechos humanos y por tal motivo, las normas con rango legal no pueden ser contrarias a los derechos enunciados en estos tratados. No solo eso: si estos tratados están dotados de rango constitucional, el mismo legislador no puede realizar estipulaciones contrarias a los mismos. (CASO PROFA II, 2006)

Siendo ello así, y siguiendo la doctrina constitucional más autorizada en nuestro país, en caso de conflicto entre un tratado constitucional y una ley prima el primero, en base al principio de jerarquía normativa o supremacía constitucional, previsto en el artículo 51° de nuestra Constitución Política (LANDA ARROYO C. , 2016) No obstante, tomando en cuenta que la Carta del 93 no postula la derogación automática de la norma legal interna en caso de conflicto con la norma del tratado internacional, será valido escoger, ante el dilema sobre un caso concreto, la norma que mejor proteja la libertad y dignidad humanas, de conformidad con el principio *pro homine*, consagrado en el artículo 1 de nuestra Constitución Política (LANDA ARROYO C. , 2016)

D.- CUARTA BASE: EL MANDATO EXPRESO DEL DERECHO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS

La Corte Interamericana de Derechos Humanos enseña, sobre el particular, que pertenecer a la Convención:

«Implica el deber de los Estados Parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos» (VELASQUEZ RODRIGUEZ, 1988).

En el caso “Metzger”, en el cual el 31.5.2001 Alemania resultó condenada por violar el derecho al plazo razonable, el TEDH, en el fundamento jurídico N° 42, señaló que

«Los EE.MM. están obligados a organizar su sistema de justicia de una manera que permita a los tribunales de las instancias inferiores y superiores estar en condiciones de cumplir con todas las exigencias necesarias para terminar con los procesos dentro de plazos razonables» (PASTOR D. R., 2004)

Según el procesalista argentino Daniel Pastor, estas prescripciones conducen a la inevitable conclusión de que resulta una obligación internacional de los Estados fijar legislativamente tanto un plazo máximo de duración del proceso penal como las consecuencias jurídicas de su violación. Estima que en este plano, muchos de los países signatarios de estos tratados internacionales sobre la materia (CEDH, PIDCP, CADH) se encuentran en falta, ya que aun no han dictado leyes para dar plena eficacia al juicio rápido. (PASTOR D. R., 2004)

En tal sentido, el artículo 2.2 de la CADH contempla el deber de los Estados miembros de adoptar disposiciones de derecho interno, a fin de efectivizar los derechos pactados a su legislación nacional. (OEA, COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 1969)

En el mismo sentido, el artículo 2.2 del PIDCP señala:

«Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no

estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter»
(UNIDAS, 1976)

E.- QUINTA BASE: NORMAS RECTORAS DE PROCEDIMIENTO

El artículo X del Título Preliminar del Código Procesal Penal prescribe que *«las normas que integran el presente título prevalecen sobre cualquier otra disposición de este Código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación»*. En tal sentido, el artículo I del referido título preliminar consagra que *«la justicia penal se imparte con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales competentes y en un plazo razonable»*. Si nos atenemos a lo dispuesto en el artículo X del mismo título, entenderemos que el plazo razonable es un criterio rector del proceso penal y todas las normas procedimentales o adjetivas plasmadas en el CPP deben interpretarse siempre a favor de optimizar la garantía del plazo razonable. Toda norma que se oponga a dicho criterio resulta inaplicable dentro de un caso judicial en concreto.

F.- SEXTA BASE: NORMAS ADJETIVAS O PROCEDIMENTALES

El artículo 342° del CPP, representa el esfuerzo del Estado de adecuar sus normas a favor del plazo razonable, ya que en sus dos incisos prescribe cual es la duración máxima del plazo legal en caso de investigaciones preparatorias simples y complejas, regulando el plazo adicional de sus prórrogas. A su turno, el inciso tercero de la misma norma en comentario, establece hasta ocho criterios para evaluar la naturaleza de un caso complejo, criterios que recuerdan a los criterios consagrados por nuestro TC para estimar la razonabilidad de duración del proceso penal.

Del mismo modo, tenemos al artículo 343.1 del CPP, que nos dice: *“El fiscal dará por concluida la investigación preparatoria cuando considere que ha cumplido su objeto, aun cuando no hubiere vencido el plazo”* Esta norma viene a ratificar la hipótesis de que el plazo razonable no siempre se

identifica con los plazos legales máximos previstos en la norma procesal. En la misma línea se ha dicho que el plazo legal constituye una figura distinta a la del plazo razonable, pues el primero se agota con la revisión del cumplimiento de la totalidad del lapso de tiempo previsto en la norma legal, en tanto que el segundo se vincula más a las necesidades del caso en concreto y la evaluación del cumplimiento de los criterios consagrados por nuestro TC sobre la razonabilidad de la duración del plazo.

1.2.5.- BASES PARA SUSTENTAR AL CONTROL JUDICIAL DE OFICIO COMO MANIFESTACIÓN DEL RENDIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL PLAZO RAZONABLE EN EL PROCESO PENAL

A.- PRIMERA BASE: FUNCIONES DEL JUEZ DE GARANTÍAS

Todo juez penal dentro de un proceso judicial (sea de investigación preparatoria o de juzgamiento) es un juez defensor de la Constitución³. Tomando en cuenta que el Perú ha aprobado y ratificado instrumentos internacionales de derechos humanos donde se consagra al plazo razonable como un derecho humano, el juez no puede desconocer su existencia dentro del proceso penal, y aun de oficio, en el caso de detectar indicios de vulneración del derecho, debe actuar procurando corregir inmediatamente la situación lesiva aplicando los recursos legalmente permitidos y si es que existe incompatibilidad de normas, preferir las de rango constitucional, inaplicando las normas legales o infra legales que se opongan a las primeras. En el caso de no existir disposiciones taxativas dentro del derecho vigente, deberá aplicar –vía control de convencionalidad- los criterios consagrados en los tratados internacionales sobre DDHH, aprobados y ratificados por el Estado. En estas secciones

³ TAJADURA TEJADA, Javier. (2009). *Estudio Preliminar*. En *Syllabus de Derecho Procesal Constitucional*. (2da ed.). Perú: Editado por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional Peruano. Pág. 23.

revisaremos los controles que puede utilizar el juez para corregir las afectaciones al plazo razonable, dentro de un caso en concreto.

- **Control de legalidad:** Si bien es cierto, de cara con lo dispuesto en el artículo 322° del NCPP, sobre el fiscal recae la dirección de la investigación preparatoria, no es menos cierto que el control de legalidad de dicha labor se encuentra a cargo del juez de garantías, conforme así lo dispone el art. 323° del NCPP. Por esta razón es que el procesalista peruano CESAR SAN MARTIN CASTRO nos dice que *«lo fundamental, no es tanto quien asume la titularidad de la investigación, sino qué controles se instauran para evitar la utilización arbitraria del poder público, consistente en el avasallamiento de la persona y de sus derechos fundamentales»* (SAN MARTIN CASTRO, 1999).
- **Control difuso:** Nuestra Corte Suprema ha destacado, que *en un Estado Constitucional de Derecho con supremacía de la norma constitucional, el ejercicio del control difuso constituye un deber constitucional de los jueces.* (CONSULTA, 2015) En tal sentido, el control difuso se encuentra plasmado en el segundo párrafo del artículo 138° de nuestra Constitución que prescribe: *«En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior»*
- **Control de convencionalidad:** En tal sentido, el rendimiento constitucional del derecho fundamental al plazo razonable implica que los titulares del ius persecuendi y del ius puniendi asignados para el impulso y la resolución de la causa (básicamente, el fiscal, pero por, sobre todo, el juez de la causa) observen rigurosamente su cumplimiento y busquen allanar todos los obstáculos que impidan su realización dentro del proceso. Esto implica realizar una interpretación favorable hacia la tutela de derechos fundamentales contenidas en los tratados internacionales de DDHH aprobados y ratificados por el Perú, aun cuando producto de dicha interpretación

deba desestimarse ciertas normas de derecho interno que sean incompatibles con estos tratados, lo que en los últimos años ha venido a denominarse *control de convencionalidad*.

El control de convencionalidad es un instituto procesal de carácter internacional, que se constituye en una herramienta útil para el juez o tribunal del Estado parte de un tratado internacional de Derechos Humanos, a fin de dar vigencia efectiva a la protección de dichos derechos dentro del proceso bajo su dirección. Este principio nace a partir del artículo 2 de la CADH, que establece que *los Estados deben adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos en la referida Convención*.

Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia recaída en el caso ALMONACID ARELLANO VS CHILE año 2006, consagró el siguiente criterio:

124. *“La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana” (ALMONACID ARELLANO Y OTROS VS CHILE, 2006)*

B.- SEGUNDA BASE: DEBERES GENÉRICOS DEL JUEZ

La intervención de oficio del juez, ante la constatación de la vulneración del plazo legal (primer indicio de vulneración por exceso del plazo razonable) puede también sustentarse en los deberes y atribuciones del juez sobre el impulso y dirección del proceso (artículo 5 del T.U.O de la L.O.PJ) con el fin de hacer efectivo dentro del proceso, a uno de los principios procesales de la administración de justicia, como es el principio de celeridad (artículo 6° del T.U.O de la L.O.P.J) cuya protección se encuentra asignada al juez como uno de sus deberes (artículo 184 inc. 1 del T.U.O de la L.O.P.J)

C.- TERCERA BASE: PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL

El art. I inciso 3 del Título Preliminar del Código Procesal Penal del 2004 prescribe que: *“Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este Código. Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia.”* Si como se ha dicho, todo juez penal es un defensor de la Constitución dentro del proceso penal, tiene tanto el deber como el derecho de intervenir, aun de oficio, ante cualquier situación que genere indefensión material a las partes procesales.

D.- CUARTA BASE: PRINCIPIO DE NO DEJAR DE ADMINISTRAR JUSTICIA POR VACÍO O DEFICIENCIA DE LA LEY.

Este es uno de los principios de la función jurisdiccional, plasmados en el artículo 138 inciso 8 de nuestra Constitución Política. Consideramos que es un criterio que puede ser invocado por el juez de investigación preparatoria para sustentar el control judicial de oficio, ante la detección de un caso en donde se aprecia la vulneración por exceso del plazo legal, ya que la ausencia de una norma adjetiva o procedimental que regule el control de oficio no sería

óbice para la actuación del juez, quien debe corregir de oficio estas falencias realizando un control constitucional y eventualmente convencional sobre el análisis del caso concreto.

E.- QUINTA BASE: PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD

El Art. VII inc. 3 del T.P del CPP prescribe que *«La ley que coacte la libertad... o establezca sanciones procesales, será interpretada restrictivamente. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derecho»*. De la misma forma, el artículo 139 inciso 11 de nuestra Constitución Política consagra como principio de la función jurisdiccional: *«La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales»*

Se trata de normas de interpretación procesal y material respectivamente, pero que tienen en común la favorabilidad del imputado en caso de duda o conflicto entre leyes o criterios del caso concreto. Siendo así, ante cualquier duda sobre la ley o el criterio aplicable el juez deberá elegir la norma o el criterio que optimice en mayor medida la garantía del plazo razonable, consagrada en el artículo I del TP del CPP (criterio rector) y en los tratados internacionales sobre DDHH, aprobados y ratificados por el Perú, los cuales detentan rango constitucional.

F.- SEXTA BASE: CONSAGRACIÓN JURISPRUDENCIAL DEL CONTROL JUDICIAL DE OFICIO

Como punto de partida hay que citar la Casación N° 54-2009-La Libertad, de fecha 20 de Julio del 2010, que consagra como doctrina vinculante:

“El requerimiento fiscal, acusatorio o no acusatorio, sin embargo, tiene lugar no como el ejercicio de una facultad discrecional del Ministerio Público, sino como la ejecución de una obligación indispensable o

necesaria para la continuación del proceso, sea para definir la clausura a través del sobreseimiento o para abrir la etapa principal de enjuiciamiento... el proceso penal no se concibe sin su ejercicio”.

Lamentablemente, esta Casación, si bien reconoce el deber ineludible de Fiscalía, no estatuye una consecuencia de orden procesal ante la vulneración del plazo razonable, en tanto concluye: *“Por tanto, el incumplimiento de los plazos legalmente previstos para su emisión, por su carácter de acto necesario para el proceso, sólo acarrea responsabilidad disciplinaria como lo establece el artículo 144°.2 NCPP...”*.

No obstante, en años posteriores, nuestra Corte Suprema ha ido completando los matices de la consecuencia procesal en caso de vulneración por exceso del plazo de investigación preparatoria. Así, la Casación N° 309-2015, Lima, de fecha 29 de marzo del 2016, consagró como doctrina vinculante lo siguiente:

*«[...]el requerimiento de la prórroga del plazo de investigación preparatoria, debe realizarse **bajo un control judicial en audiencia** donde ejerzan contradicción los defensores de los imputados, de su fundamentación fáctica y jurídica y de las actuaciones del Ministerio Público...sustentado en la garantía y el pleno respeto del derecho fundamental al debido proceso y sus diversas manifestaciones, como es el plazo razonable»* (Fundamento jurídico vigésimo tercero).

A su turno, la Casación 134-2012, Áncash, al desarrollar el tema de la duración de la investigación preliminar, ha consagrado la aplicación del principio de preclusión ante la vulneración de los límites del plazo, al referir:

“Que, el artículo 144° inciso 1) del Código adjetivo antes citado, señala que los plazos solo pueden ser prorrogados cuando la ley lo permita. Esto significa, que, de ningún modo, cabe la habilitación judicial del plazo, cuando ello no esté contemplado expresamente.

De allí, que frente al vencimiento del término para llevar a cabo una determinada actuación procesal a cargo del Fiscal -en su condición de titular de la acción penal y director de la investigación- no corresponda el amparo de solicitudes de prórroga del mismo. **Menos aún, que, en tal circunstancia de conclusión del plazo, recién se pretenda la calificación del caso, como complejo.** Asimismo, en aplicación del principio de la preclusión procesal.

En tal supuesto, corresponde continuar con el normal desarrollo de las siguientes etapas del proceso. Así, en el caso del vencimiento del plazo de la investigación preliminar, el Ministerio Público, debe proceder con el requerimiento fiscal, acusatorio o de sobreseimiento.

Consideramos que estas reseñas jurisprudenciales pueden ser invocadas por el juez de garantías al momento del control sobre el plazo de duración de la investigación preparatoria. Para tal efecto, deberá citar a las partes procesales a una audiencia de oficio para debatir la razonabilidad del plazo, escenario en donde, luego del debate pertinente, deberá analizar si existió o no violación del P.R por Fiscalía, en base a los parámetros de complejidad previstos en la ley y en la jurisprudencia. De estimarse positiva la pregunta, deberá de determinar a continuación el momento en que el plazo razonable habría sido violado y luego de ello, aplicar la consecuencia procesal pertinente, la misma que, según la jurisprudencia reseñada, podría consistir en la declaración de la caducidad del derecho de prórroga o prolongación de investigación preparatoria, por no haber sido invocado en su oportunidad, decisión que naturalmente, conlleva a declarar la NULIDAD de los actos de investigación y/o EXCLUSIÓN DE LAS FUENTES DE PRUEBA recopiladas fuera del plazo razonable de duración de la investigación preparatoria, **en aplicación de la regla de exclusión derivada del artículo VIII, inciso 2 del TP del CPP**, donde se prescribe que: *“Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos*

fundamentales de la persona” Y es que, si entendemos que el P.R. es un derecho fundamental implícito al debido proceso, no tendremos objeción en aceptar que su violación durante la investigación preparatoria conlleva a la imposibilidad de utilizar las fuentes de prueba obtenidas como consecuencia de esta violación para efectos de sustentar los requerimientos y actos procesales que se realicen en las ulteriores etapas del proceso (acusación y juzgamiento)

Esta es una sanción que no resulta tan drástica como la exclusión del proceso penal o la declaratoria de sobreseimiento que en su oportunidad consagró el Tribunal Constitucional en los casos CHACON MALAGA y SALAZAR MONROE y que fuera tan criticada por la opinión pública y finalmente abandonada dicha tesis años más tarde por el mismo TC, en la sentencia recaída con fecha 14 de mayo del 2015, en el caso ARISTOTELES ROMAN ARCE PAUCAR, sentencia que a su vez, nosotros hemos criticado duramente en los acápites anteriores.

Lo que si parece claro con esta propuesta que formulamos, es que el control judicial de oficio opera como un remedio específico para el caso de la vulneración del derecho fundamental, a diferencia de las propuestas que se han estudiado hasta aquí (compensatorias civiles, sustantivas, administrativas, etc.) y que el efecto psicológico en el persecutor público resulta del todo esperable, puesto que un fiscal a quien se le excluye pruebas por violar plazos, lo pensará dos veces al momento de diseñar su estrategia del caso y disponer los tiempos de sus diligencias en sus futuros casos, máxime cuando, según la propuesta que formulamos en el anexo de este trabajo, la violación de plazos acarrea responsabilidad funcional por causal de FALTA GRAVE, tanto para jueces como para fiscales. El sistema así diseñado, no irroga gastos económicos al Estado, y estaría destinado a descongestionar el sistema jurisdiccional, mediante la utilización racional de los recursos asignados solo a casos que tengan viabilidad

de seguir siendo investigados, como parece sugerirnos PASTOR.D en las conclusiones de su brillante artículo sobre el plazo razonable (2004).

Pero el control judicial de oficio no solo se encuentra plasmado en nuestra jurisprudencia nacional, sino también a nivel de los fallos de los organismos internacionales de derechos humanos. Así, según la Corte interamericana en el caso TRABAJADORES CESADOS DEL CONGRESO VS PERÚ:

Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, legisladores y otros representantes estatales están sometidos a esos instrumentos, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de los tratados de derechos humanos no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Estado, en el marco de sus respectivas competencias deben ejercer un control ex officio entre las normas internas y los instrumentos interamericanos. (CASO TRABAJADORES CESADOS VS PERÚ, 2006)

G.- SÉPTIMA BASE: ESTÁNDARES DE LA RAZONABILIDAD DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

Para la evaluación del carácter racional del plazo —labor que, como se ha dicho en líneas anteriores, no se concibe sin previa realización de una audiencia para tal propósito— deben observarse ciertos estándares, los mismos que se derivan de las normas estipuladas en nuestro derecho interno como en el derecho internacional. Estos serían:

i) El plazo legal

El plazo legal, es el plazo estipulado previamente para cada tipo de proceso penal dentro de nuestro ordenamiento jurídico-procesal. Así por ejemplo, para el caso del proceso común, materia de este estudio, si bien el legislador peruano, por una omisión que el TC ha calificado de “inconstitucional⁴” no se ha ocupado de establecer un máximo de tiempo para su culminación (como sí sucede en otras latitudes) a cambio de ello sí ha legislado el tiempo máximo de la etapa de I.P y de la etapa intermedia. Para el caso de la etapa de I.P ha prescrito, en el artículo 342, incisos 1 y 2 del CPP del 2004, criterios sobre investigaciones simples, complejas y sus prórrogas.

El cumplimiento del máximo del plazo legal debe ser el primer indicador de la afectación del plazo razonable en el criterio del llamado “juez de garantías”, pues si la ley ha diseñado un plazo es por alguna razón, y esta razón no puede ser otra que la finalidad de garantizar el DEBIDO PROCESO que es un derecho fundamental que se ve mellado cuando se desnaturaliza la finalidad por la cual se diseñó un plazo máximo para investigar una causa criminal. En tal sentido, el juez de garantías debe monitorear, aun de oficio, el cumplimiento de los plazos legales de las investigaciones preparatorias de los procesos comunes asignados a su cargo. Detectadas las investigaciones que exceden el plazo legal debe de programar de oficio, una audiencia de control de plazos, en aplicación del artículo 2 de la CADH, la cuarta disposición final y transitoria de nuestra Constitución Política y el artículo I.1 del Título Preliminar del CPP.

ii) Criterios de complejidad del caso

⁴ Ver fundamentos 18 al 20 de la resolución aclaratoria de fecha 02 de diciembre del 2009, STC N° 03509-2009-PHC/TC.

Otro estándar es el dado por los criterios de complejidad, consagrados en la ley vigente, como en la jurisprudencia constitucional y en los tratados internacionales de DDHH, los mismos que forman parte del derecho nacional y tienen rango constitucional.

Respecto a los criterios legales, el artículo 342° del CPP de 2004 prescribe, en su inciso tercero, criterios que justificarían la prolongación de los plazos en casos complejos. Estos criterios serán materia de análisis por el juez de garantías al momento de la audiencia de control de plazo.

No obstante como un criterio general, nuestro TRIBUNAL CONSTITUCIONAL en el caso GLEISER KATS (Exp. 5228-2006-PH/TC) así como en las sentencias recaídas en los casos 594-2004-HC, 2915-2004-HC, 7624-2005-HC y 6167-2006-PHC/TC, siguiendo la doctrina del TEDH, ha establecido criterios objetivos y subjetivos para determinar la razonabilidad y proporcionalidad del plazo de la investigación fiscal.

Así dentro del criterio objetivo, se deberá atender a la naturaleza de los hechos que son materia de investigación, es decir, la complejidad del caso, que a su vez puede estar determinada: *i)* por los hechos a investigar, *ii)* número de investigados (vb: casos de criminalidad organizada), *iii)* dificultad de realizar determinadas pericias o exámenes especiales, *iv)* el tipo de delito, *v)* el grado de colaboración de las demás entidades estatales. Dentro de los criterios subjetivos se encuentra la actuación o comportamiento, tanto del investigado como del fiscal. Respecto a la *i)* conducta del investigado, deberá evaluarse si este actuó o no con actitud obstruccionista y esto puede evaluarse en base a ciertas manifestaciones, como: *1) la no concurrencia, injustificada, a las citaciones que le realice el fiscal a cargo de la investigación, 2) el ocultamiento o negativa, injustificada, a entregar información que sea relevante para el desarrollo de la investigación, 3) la recurrencia, de mala fe, a determinados procesos constitucionales u ordinarios con el fin de dilatar o paralizar la investigación, entre otros.* Respecto a *ii)*

la conducta de Fiscalía, deberá sopesarse si el titular de la acción penal mostró o no inactividad durante la investigación. Así, habrá inactividad tanto si no se realizaron todas las diligencias programadas en la disposición fiscal (falta de diligencia), así como si se programaron o llevaron a cabo actos de investigación que no resultaban idóneos para la investigación (incapacidad en la dirección de la investigación y diseño de estrategia del caso).

H.- OCTAVA BASE: NORMAS ADJETIVAS Y PROCEDIMENTALES

El artículo 143° inciso 2 del CPP del 2004 nos dice que en el proceso penal *«se computará los días inhábiles cuando se trate de medidas coercitivas que afecten la libertad personal y cuando la ley lo permita»*. En ese sentido, el artículo 126° del T.U.O de la L.O.P.J prescribe que: *«En los procesos penales se consideran hábiles todas las horas y días del año»*

De la lectura de estas normas se advierte que, nuestro sistema jurídico, en la medición del tiempo del proceso penal ha optado por el sistema del calendario gregoriano, esto es, que los plazos se computan por días, semanas y meses, siguiendo una línea temporal. Según el jurista argentino Daniel Pastor, el calendario jurídico es una guía práctica para organizar el tiempo de jueces y partes en el derecho procesal, lo que permite una alta cuota de predictibilidad (PASTOR D. , 2002). Así, el TC alemán ha señalado que *«la esencia de los preceptos referidos a plazos, es servir como derecho estricto a la seguridad jurídica. Por ello los plazos deben poder ser reconocidos del texto de la ley y no permitir interpretaciones extensivas»*. (PASTOR D. , 2002)

Finalmente, para el control de plazo, decir que existen normas reglamentarias, como la dispuesta en el artículo 14° del reglamento general de audiencias, aprobado por resolución administrativa N° 096-2006-CE-PJ, que le faculta al juez programar audiencias bajo el instituto de la “citación de oficio” debiendo el juez *«incluir en el auto de citación el objeto de la misma e información concreta de la materia a debatir»*. Consideramos que esta es una prescripción

bastante práctica para orientar al juez la forma como deberá de citar a las partes procesales en caso detecte vulneración por exceso de los plazos de la investigación preparatoria.

1.3.- DEFINICIONES CONCEPTUALES

a) Plazo legal: Definimos al plazo legal, como la parcela de tiempo que la Ley asigna a fin de llevarse a cabo una determinada actuación de autoridad o persona, dentro de un proceso o procedimiento, bajo determinadas consecuencias jurídicas.

b) Prórroga de plazo: Definimos como “prórroga de plazo” a la prolongación o continuación del plazo legal inicialmente fijado dentro de un proceso o procedimiento, en base a parámetros igualmente establecidos en la Ley.

c) Plazo razonable: A partir de las bases constitucionales ya estudiadas, podemos definir al plazo razonable como un derecho fundamental de carácter procesal, que implica que el proceso penal se realice en un determinado tiempo, definido previamente por la ley en cuanto a su plazo y a las consecuencias procesales de su vulneración, y que sea el idóneo para el cumplimiento del DEBIDO PROCESO y de las demás garantías constitucionales (derecho a la defensa técnica, ofrecimiento de pruebas, tutela jurisdiccional, etc.), de acuerdo con el tipo de proceso en el que se encuentra sometido el imputado. Asimismo, el plazo razonable es a la vez criterio rector del proceso penal, lo que implica que su cumplimiento sea controlado –aun de oficio- por parte del juez penal en cada una de las etapas del proceso común.

d) Control judicial en la investigación preparatoria: Se refiere a la intervención que efectúa el juez durante la I.P, a fin de que el ejercicio de la actuación fiscal y de las demás partes procesales se efectúe dentro de un cauce regular, respetando las garantías del Debido proceso, del Derecho de Defensa y otros derechos fundamentales.

e) Control de plazo: Mecanismo procesal, a través del cual la parte afectada, generalmente el imputado (aunque a veces el agraviado o tercero civil) solicita el pronunciamiento judicial a fin de evitar que el señor fiscal vulnere los plazos de la I.P, excediendo el tiempo asignado para el término de la investigación. Este control también puede efectuarse de oficio, en base a controles de constitucionalidad y convencionalidad, conforme lo hemos descrito en líneas anteriores.

f) Control de oficio del plazo de investigación preparatoria: Se trata de un instituto procesal inspirado en el mandato expreso del orden constitucional del Estado de Derecho y de la fuerza vinculante de los tratados internacionales de Derechos Humanos, a través del cual, el juez de garantías, ante la constatación de vulneración del derecho fundamental al P.R, por propia iniciativa lleva a cabo un control de razonabilidad del plazo legal excedido por Fiscalía durante la investigación preparatoria. El ejercicio de este control se debe realizar a través de una audiencia convocada de oficio por el juez de garantías, en donde, el juez, con la presencia obligatoria del fiscal, del abogado del acusado (o de un defensor público) y la presencia facultativa del resto de sujetos procesales, evalúa los criterios de complejidad previstos en el ordenamiento interno (art. 342. inc. 3 del CPP), resolviendo en base a un examen de constitucionalidad y convencionalidad y conforme a sus deberes genéricos consagrados en su ley orgánica (arts. 5, 6 y 184), los principios de administración de justicia plasmados en la Constitución Política (art. 139 incisos 8 y 9) y el principio de igualdad procesal (art. I inc. 3 del TP del CPP), siendo además consciente de su función constitucional de juez de garantías.

En cuanto a la constatación positiva de la vulneración del P.R, el juez deberá definir el momento en que el plazo se volvió irrazonable, conforme al juicio de evaluación donde se aplicaron los parámetros antes referidos, para luego proceder declarando la conclusión de la

I.P por caducidad del plazo y la nulidad de los actos de investigación y/o exclusión de fuentes de prueba llevados a cabo con posterioridad a la fecha en que el plazo se tornó irrazonable, en aplicación de lo consagrado en la Casación vinculante N° 134-2012 sobre el instituto de la caducidad del plazo, la regla de exclusión derivada del art. VIII del TP del CPP y el deber fiscal de formular el requerimiento acusatorio, contenido en la Casación 54-2009. Consideramos que esta solución es menos controversial que la llamada “*exclusión por pérdida de legitimidad punitiva*” propuesta por el Tribunal Constitucional en el caso Chacón Málaga (STC 3509-2009) o que el llamado “*sobreseimiento de oficio*” postulado en el caso Salazar Monroe (STC 05350-2009-PHC/TC) Y es que, al margen de lo dudoso que sería para el sistema penal incorporar soluciones propias del fuero constitucional, es de advertir que tales propuestas de solución están diseñadas a nivel de la última etapa del proceso penal (juzgamiento) y aun después de culminado todo el proceso penal, por lo que resulta inoficioso aplicarlas como propuesta de solución en el campo materia de la presente investigación (fase de investigación preparatoria)

1.4.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Tabla 1 Operacionalización de variables

Variable Independiente	Dimensiones	indicadores	Técnicas e instrumentos
AUSENCIA DE CONTROL JUDICIAL DE OFICIO	<i>Capacidad de cumplimiento del plazo legal por parte del fiscal</i>	Frecuencia de violaciones al plazo legal	
		Intensidad de la violación del plazo legal por parte del fiscal durante la Investigación Preparatoria, estimada en días/meses	TECNICA: OBSERVACIÓN
<i>Funcionalidad del mecanismo procesal del apercibimiento judicial para que el fiscal concluya la investigación preparatoria</i>		Número de apercibimientos judiciales, de la totalidad de casos Tiempo de retardo a partir de la fecha del requerimiento Nivel de afectación del plazo legal, de acuerdo al número de días/meses	INSTRUMENTO: GUIA DE OBSERVACIÓN

Variable Dependiente	Dimensiones	Indicadores	
GARANTÍA FUNDAMENTAL AL PLAZO RAZONABLE	<i>Criterios de complejidad del caso</i>		TECNICA: OBSERVACIÓN
		Número de imputados/agraviados	INSTRUMENTO: GUIA DE OBSERVACIÓN
		Fecha de comunicación de formalización	
		Fecha de comunicación de prórroga	
		Fecha de comunicación de complejidad de caso	
		Fecha de conclusión de la investigación preparatoria	

1.5.- HIPÓTESIS

La ausencia de un control judicial de oficio perjudica la garantía fundamental del plazo razonable durante la investigación preparatoria dirigida por Fiscalía en los procesos comunes que se tramitaron en el juzgado de Investigación preparatoria de Imaza en los años 2015-2018.

CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES

2.1.- Tipo de investigación

La presente investigación es del tipo cuantitativa, es decir, *los estudios cuantitativos trabajan con cantidades numéricas cuya finalidad es determinar similitudes y diferencias en medidas proporcionales. Ese tipo de investigación supone el desarrollo de una base de datos los cuales serán analizados estadísticamente con rigurosidad y cuidado para levantar y registrar información relevante* (Barragán et al., 2003, p.115).

2.2.- Método de investigación

Como parte del método de investigación, se utilizaron técnicas para la recolección de datos, formulando una muestra poblacional a partir de recolección de 129 casos en el periodo comprendido desde el año 2015 al 2018, en el juzgado de Investigación preparatoria de Imaza a fin de obtener una perspectiva sobre la vulneración de la aplicación del plazo razonable durante los procesos legales ya antes mencionados.

2.3.- Diseño de contrastación.

La investigación es de un diseño descriptivo transversal, no experimental, porque *tiene como finalidad describir la realidad del fenómeno en estudio, es decir, analiza explicando la situación actual, identifica factores representativos detallando sus características y por último determina a base de la rigurosidad y exhaustividad de la descripción las estrategias que se puede obtener del objeto de estudio para su posterior solución. Asimismo, es usada también para comprobar hipótesis de estudio. En otras palabras, consiste en describir a través de términos el contexto en el cual se desarrolla el fenómeno; los sujetos, el tiempo, la situación en sí, cosas y demás intervinientes. Por otro lado, según Gómez (2009) manifiesta que las investigaciones de corte transversal no experimental “no se puede realizar un tratamiento*

en las variables. No se expone al sujeto de estudio a ser estimulado". (p.92) Es decir, obtiene datos del objeto de estudio una sola vez en el tiempo y es no experimental porque no se realiza manipulación de las variables.

2.4.- Población, muestra y muestreo

a) Población

Ventura J. (2017) describe que la población es *"un conjunto de elementos que contienen ciertas características que se pretenden estudiar. Se define también como el conjunto de todas las unidades de muestreo"*.

En esta investigación se ha trabajado con una población de 129 casos (procesos comunes en etapa de investigación preparatoria) los cuales son los observados durante los años 2015 al 2018 en el juzgado de Investigación preparatoria de Imaza.

b) Muestra

Según Carrera, L y Vasquéz, M. (2007) explican que la muestra *"es un subgrupo de la población"* (p. 92). No obstante, en esta investigación, la muestra es censal porque se trabajó con toda la población, tomando en cuenta que la unidad de análisis está representada por cada uno de los expedientes estudiados a través de la observación directa.

2.5.- Técnicas, instrumentos equipos y materiales de recolección de datos

a) Técnicas

Se utilizó la observación directa. *La observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación.*

La observación está influida por el marco(s) teórico(s) que ha aprendido el experto, y que, partiendo del mismo, va a influir en esa forma de observación que inicia el proceso de conocimiento. Para la observación lo primero es plantear previamente qué es lo que interesa: observar. En definitiva, haber seleccionado un objetivo claro de observación. En nuestro caso, la observación directa de casos judiciales donde el presente investigador desempeñó como juez durante el tiempo de exploración.

b) Instrumentos de recolección de datos

Se utilizó la guía de observación. *La guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas, que orientan el trabajo de observación dentro del aula señalando los aspectos que son relevantes al observar. Una guía de observación, por lo tanto, es un documento que permite encausar la acción de observar ciertos fenómenos. Esta guía, por lo general, se estructura a través de columnas que favorecen la organización de los datos recogidos.*

c) Validez

Según el criterio de validez, *«existe este criterio de rigor científico cuando se ha seguido un meticuloso y cuidadoso proceso a nivel metodológico. Este criterio se justifica por la correcta interpretación de los resultados, el método que se ha escogido para recolectar datos, la validez del instrumento por juicio de expertos»* (Noreña, Moreno, Juan, y Malpica, 2012, p.266).

d) Confiabilidad

Noreña, Moreno, Juan, y Malpica, (2012) *“La confiabilidad consiste en que los datos que arroja el instrumento de investigación, son verdaderos; sobre los cuales otros investigadores podrán utilizar los instrumentos para realizar sus propios estudios”.* (p.266).

2.6.- Procesamiento y análisis de datos

Para el procesamiento de la información de los datos se utilizó la guía de observación, para ordenar y representar los diferentes casos judiciales con sus respectivas descripciones, análisis e interpretaciones a fin de saber si la propuesta de la presente investigación sobre la aplicación del control judicial de oficio para aminorar las consecuencias sobre el derecho al plazo razonable durante la I.P dirigida por fiscalía en los procesos comunes tramitados en el JIP de Imaza. Años 2015-2018.

CAPÍTULO III: RESULTADOS

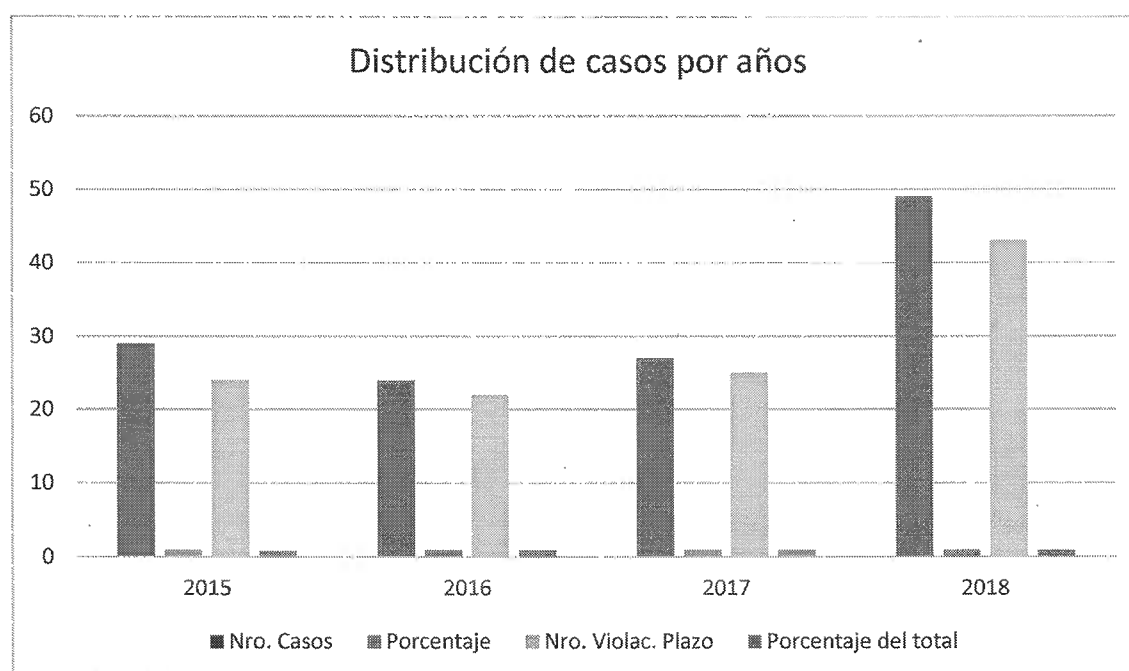
Este capítulo contiene los resultados, donde a través de tablas y figuras se expone los datos de casos judiciales sobre el número e intensidad de violaciones al plazo legal incurridas por Fiscalía, así como de los apercibimientos judiciales frente a estas violaciones.

Capacidad de cumplimiento del plazo legal por parte del fiscal durante la Investigación Preparatoria en el distrito de Imaza/Bagua/Amazonas. Años 2015-2018.

Tabla 2 Capacidad de cumplimiento del plazo legal

Años	Número de casos	Frecuencia de violaciones al Plazo Legal	Porcentaje del total
2015	29 (100%)	24	83%
2016	24 (100%)	22	91.6%
2017	27 (100%)	25	92.59%
2018	49 (100%)	43	87%
Total	129	114	88.37%

Figura 1 casos judiciales distribuidos por años (2015-2018)



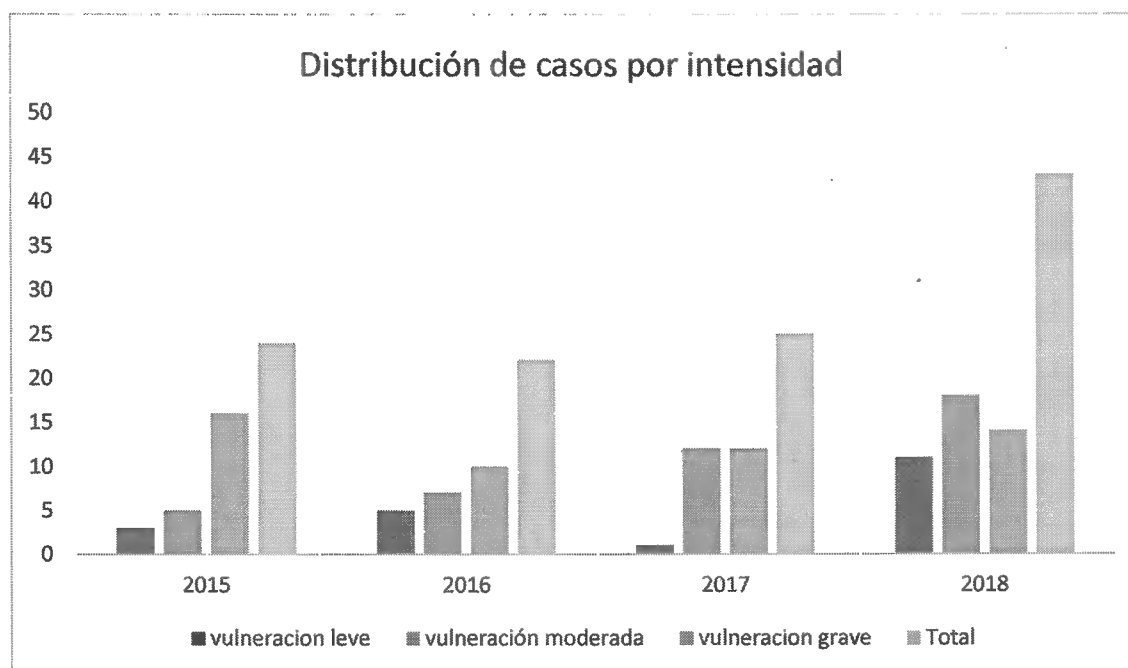
Interpretación: En la figura se observa a casos judiciales distribuidos por años (2015-2018), los mismos que guardan como denominador común el ser datos sobre violaciones del plazo legal incurridas por Fiscalía respecto a investigaciones preparatorias correspondientes a procesos comunes tramitados de acuerdo al CPP del 2004.

Intensidad de la violación del plazo legal por parte del fiscal durante la Investigación Preparatoria en el distrito de Imaza/Bagua/Amazonas. Años 2015-2018.

Tabla 3 Intensidad de la violación del plazo legal

Años	Número de violaciones al plazo legal	Intensidad Leve (hasta un mes)	Intensidad moderada (de uno a cuatro meses)	Intensidad Grave (más de cuatro meses)
2015	24/29	3 (10.34%)	5 (17.2 %)	16 (55.17%)
2016	22/24	5 (20.83%)	7 (29.16%)	10 (41.6%)
2017	25/27	1 (3.7%)	12 (44.4%)	12 (44.4%)
2018	43/49	11 (22.44%)	18 (36.7%)	14 (28.57%)
Total	114/129	20 (14.72%)	42 (32.55%)	52 (40.31%)

Figura 2 Distribución de casos por intensidad



Interpretación: En la figura se observa a casos judiciales distribuidos por años (2015-2018), los mismos que guardan como denominador común el ser datos sobre el número e intensidad de violaciones del plazo legal incurridas por Fiscalía respecto a investigaciones preparatorias correspondientes a procesos comunes tramitados de acuerdo al CPP del 2004.

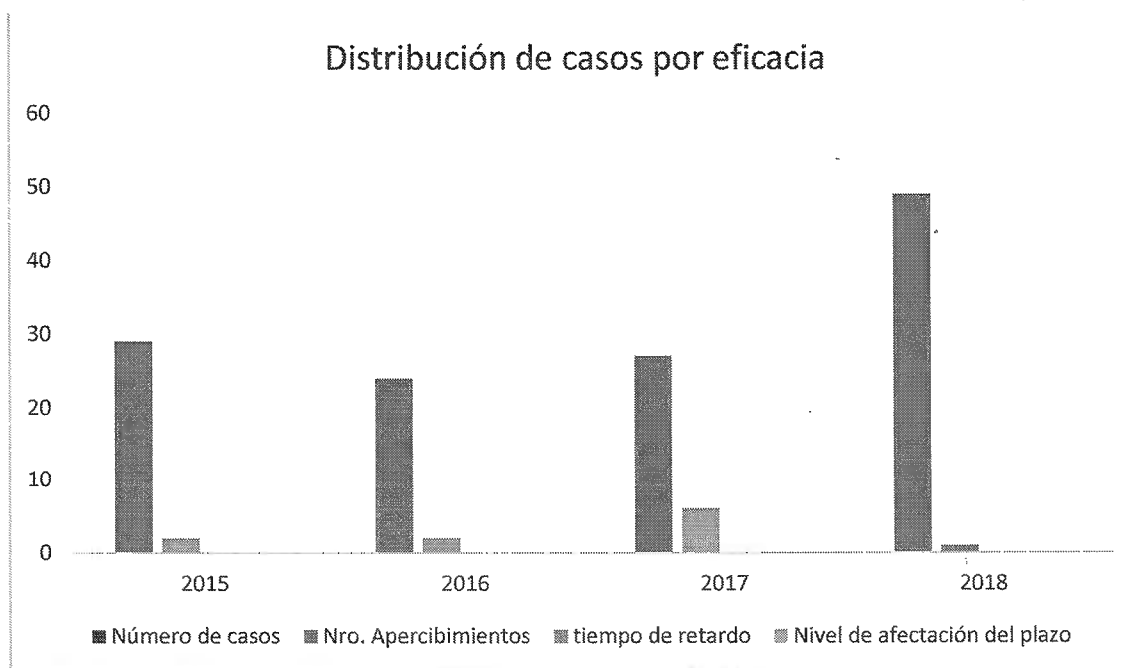
Funcionalidad del mecanismo procesal del apercibimiento judicial para que el fiscal concluya la investigación preparatoria en el distrito de Imaza/Bagua/Amazonas. Años 2015-2018.

TABLA 4 INDICADORES DE FUNCIONALIDAD DE LOS APERCIBIMIENTOS FRENTE A VIOLACIONES

Años	Número de casos	Número de apercibimientos judiciales	Tiempo de retardo a partir de la fecha del requerimiento (se otorga 3 días hábiles)	Nivel de afectación del plazo legal en dicho proceso
2015	29 (100%)	1 (3.44%)	Doce días	Moderada
2016	24 (100%)	2 (8.3%)	Un mes y un día/ veintisiete días	Grave/ Grave
2017	27 (100%)	6 (22.2%)	Un mes y once días/ un mes y diez días/ Un mes y tres días/ un día/ veintisiete días/ veintinueve días/	Grave/ Grave/ Grave/ Moderada/ Grave/ Grave/
2018	49 (100%)	4 (8.16%)		

	Cuatro meses y cinco días/	Grave/
	Catorce días/	Leve/
	Dieciséis días/	Moderada/
	Trece días	Moderada
Total		

Figura 3 Distribución de casos por eficacia



Interpretación: En la figura se observa a casos judiciales distribuidos por años (2015-2018), los mismos que guardan como denominador común el ser datos sobre la eficacia de los apercibimientos frente a violaciones del plazo legal incurridas por Fiscalía respecto a investigaciones preparatorias correspondientes a procesos comunes tramitados de acuerdo al CPP del 2004.

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN

En este apartado se describirá cada uno de los resultados detallados en las tablas del capítulo anterior, resaltando como estos datos reafirman la posición de la hipótesis y la postura personal esbozada en la base teórica.

En el gráfico 01, se aprecia que, en el año 2015, de un total de 29 casos (100%) Fiscalía vulneró el plazo legal en 24 de ellos (83%) siendo que, **según el gráfico 02**, tres de ellos configuran una vulneración leve (hasta un mes de retardo) 5 de ellos una vulneración moderada (de un mes hasta cuatro meses) y 16 de ellos una vulneración grave (de cuatro meses a más). Asimismo, según el **gráfico 01**, en el año 2016, de un total de 24 casos (100%) Fiscalía vulneró 22 veces el plazo legal (91.6%) siendo que según el **gráfico 02**, cinco de ellos configuran una vulneración leve (de días hasta un mes) 7 de ellos una vulneración moderada (de un mes hasta cuatro meses) y 10 de ellos una vulneración grave (de cuatro meses a más) A su turno y siguiendo la secuencia de **ambos gráficos**, en el año 2017, de un total de 27 casos (100%) Fiscalía vulneró 25 veces el pazo legal (92.59%) 1 de ellos con vulneración leve (menos de un mes de retardo) 12 de ellos con vulneración moderada (de un mes hasta cuatro meses) y 12 de ellos con vulneración GRAVE (de cuatro meses a más) Finalmente, se aprecia que en el año 2018, de un total de 49 casos (100%) Fiscalía vulneró el plazo legal en 43 de ellos (87.7%) 11 de ellos con vulneración leve (hasta un mes de retardo) 18 de ellos con vulneración moderada (de un mes a cuatro meses) y 14 de ellos con vulneración grave (de cuatro meses a más meses)

La información descrita reafirma un aspecto importante del problema de nuestra investigación: Que en la mayoría de los casos (114 veces de un total de 129 casos, durante

los cuatro años de investigación: lo que representa un 88.37% del total, según el gráfico 01), los fiscales no respetan sus propios plazos dispuestos en sus carpetas fiscales, demorándose meses adicionales al vencimiento del plazo para emitir sus disposiciones de conclusión de la investigación preparatoria e inclusive, después de emitidas ellas, de presentar los requerimientos propios de la fase intermedia (acusación y sobreseimiento) lo que en términos concretos importa una prolongación irrazonable de la I.P que vulnera el principio de igualdad de armas y el debido proceso, pues se siguen recabando pruebas de cargo cuando el plazo legal ya se encontraba vencido.

Sobre este extremo de la investigación de la guía de observación de casos, hemos recopilado interesantes datos:

- a) **Año 2015**: El primer caso es el 13-2015, en donde si bien la fecha de conclusión data del 12/05/2017, no obstante, el requerimiento mixto fue presentado al despacho judicial con fecha 09/01/2018. Por tal razón, la vulneración del P.R de duración del proceso complejo es GRAVE: Un año, dos meses y 24 días. Otro ejemplo del mismo año es el caso 21-2015. En este proceso (de carácter complejo por pluralidad de agraviados e imputados), si bien la fecha de la conclusión data del 04/12/2017 no obstante, el requerimiento acusatorio fue presentado al despacho judicial con fecha 27/02/18. Por lo tanto, la vulneración del proceso complejo en este caso es GRAVE: Un año y cinco meses. Un tercer ejemplo, también del mismo año, es el caso 25-2015 En este proceso (de carácter complejo, por el número de actos de investigación y pericias) si bien la fecha de la conclusión data del 06/04/2017, no obstante, el requerimiento de acusación fue comunicado al despacho judicial con fecha 12/07/2017. Por lo tanto, la afectación al plazo razonable de duración del proceso

complejo es GRAVE: 5 meses y un día. (Se descarta de este año los casos de afectaciones leves al plazo razonable)

- b) **Año 2016:** el primer caso que tenemos es el 04-2016 (declarado complejo desde su inicio por la cantidad de documentos a recabar) en donde si bien la fecha de conclusión data del 28/09/2016 no obstante, el requerimiento fiscal fue presentado recién con fecha 30/01/2017. Por lo tanto, la afectación al plazo razonable es MODERADA: 3 meses y trece días. El segundo caso se trata de un proceso simple con prórroga: el 16-2016, en donde, si bien, la fecha de conclusión data del 10/03/2017, no obstante el requerimiento de acusación fue presentado al despacho judicial con fecha 06/07/2017. Por tanto, la afectación al plazo razonable es GRAVE: 7 meses con seis días. El tercer caso, se trata de un proceso simple con prórroga: el 19-2016, en donde, si bien, la fecha de conclusión data del 18/01/2017, no obstante el requerimiento de acusación fue presentado al despacho judicial con fecha 19/06/2017. Por tanto, la afectación al plazo razonable es GRAVE: 5 meses con 13 días. El cuarto caso, se trata igualmente de otro proceso simple con prórroga: el 22-2016, en donde, si bien, la fecha de conclusión data del 09/03/2017, no obstante el requerimiento de acusación fue presentado al despacho judicial con fecha 07/06/2017. Por tanto, la afectación al plazo razonable es GRAVE: 4 meses con dos días. El quinto caso se trata de un proceso simple: El 30-2016, en donde, si bien, la fecha de conclusión data del 12/04/2017, no obstante el requerimiento de acusación fue presentado al despacho judicial con fecha 08/06/2017. Por tanto, la afectación al plazo razonable es GRAVE: 4 meses y veinte días. (Se descarta de este año los casos de sobreseimientos y afectaciones leves)

- c) **Año 2017:** el primer caso que exponemos es el 16-2017, en donde, si bien, la fecha de conclusión data del 25/04/2017, no obstante el requerimiento de acusación fue presentado al despacho judicial con fecha 22/05/2018. Por tanto, la afectación al plazo razonable es GRAVE: 09 meses y dieciséis días. El segundo caso que exponemos es el 39-2017, un proceso simple con prórroga, en donde, si bien, la fecha de conclusión data del 29/3/2018, no obstante el requerimiento mixto fue presentado al despacho judicial con fecha 11/05/2018. Por tanto, la afectación al plazo razonable es MODERADA: Un mes y veintiocho días. (Se descarta de este año los casos de sobreseimientos y afectaciones leves)
- d) **Año 2018:** El primer caso que presentamos es el 04-2018, proceso simple, en donde si bien, la fecha de conclusión data del 15/04/2019, no obstante el requerimiento de acusación fue presentado al despacho judicial con fecha 15/08/2019. Por lo que, la afectación al plazo razonable es GRAVE: UN AÑO, un mes y 25 días. El segundo caso que exponemos es el 07-2018, un proceso simple en donde, si bien, la fecha de conclusión data del 25/07/2018, no obstante, el requerimiento mixto fue presentado al despacho judicial con fecha 09/11/2018. Por tanto, la afectación al plazo razonable es GRAVE: Cuatro meses y 19 días. El tercer caso que exponemos es el 08-2018, un proceso simple en donde, si bien, la fecha de conclusión data del 30/11/2018, no obstante, el requerimiento mixto fue presentado al despacho judicial con fecha 14/02/2019. Por tanto, la afectación al plazo razonable es GRAVE: Siete meses y 12 días. El cuarto caso que exponemos es el 18-2018, un proceso simple en donde, si bien, la fecha de conclusión data del 20/12/2018, no obstante, el requerimiento mixto fue presentado al despacho judicial con fecha 17/01/2019. Por tanto, la afectación al plazo razonable es MODERADA: Un mes y 10 días. El quinto caso que exponemos

es el 44-2018, un proceso simple en donde, si bien, la fecha de conclusión data del 11/03/2019, no obstante, el requerimiento acusatorio fue presentado al despacho judicial con fecha 20/05/2019. Por tanto, la afectación al plazo razonable es MODERADA: Dos meses y 20 días. El sexto caso que exponemos es el 51-2018, un proceso simple en donde, si bien, la fecha de conclusión data del 11/03/2019, no obstante, el requerimiento acusatorio fue presentado al despacho judicial con fecha 23/07/2019. Por tanto, la afectación al plazo razonable es GRAVE: Cuatro meses y 18 días. El séptimo caso que exponemos es el 61-2018, un proceso simple en donde, si bien, la fecha de conclusión data del 10/06/2019, no obstante, el requerimiento acusatorio fue presentado al despacho judicial con fecha 18/07/2019. Por tanto, la afectación al plazo razonable es MODERADA: Dos meses y 17 días. (Se descarta de este año los casos de sobreseimientos y afectaciones leves)

A su turno en el gráfico 03, se aprecia que en el año 2015 de un total de 29 procesos comunes (100%) hubo un apercibimiento judicial para que el fiscal concluya su plazo, bajo responsabilidad administrativa-comunicación a su órgano de control (3.44% del total) pero que no evitó la vulneración moderada del P.R de dicha investigación preparatoria simple (un mes y ocho días de retardo) aun cuando la disposición de conclusión fue emitida doce días después del apercibimiento⁵. Asimismo, en el año 2016, de un total de 24 procesos comunes (100%) hubo dos conminaciones judiciales al fiscal para que concluya su investigación (8.3%), pero en ambos casos, dicha conminación judicial no evitó la vulneración grave del P.R (más de un año en un caso simple con prórroga y 9 meses con cinco días en otro caso de carácter complejo) aun cuando en el primer caso la disposición de conclusión de la I.P fue

⁵ Fecha del apercibimiento: 27/03/2015, fecha de la conclusión: 08/04/2015.

emitida un mes y un día después del apercibimiento judicial⁶, en tanto que en el segundo caso veintisiete días después del apercibimiento judicial⁷. Por su parte, en el año 2017, de un total de 27 procesos comunes (100%) hubo hasta seis conminaciones judiciales para que el fiscal concluya su investigación, pero esto no evitó la vulneración grave (5 casos) y moderada, del plazo razonable (1 caso). Así, en el primer caso, la disposición de conclusión de I.P fue emitida un mes y doce días después del apercibimiento judicial⁸. Pese a ello, se constató que la vulneración de la investigación de este caso simple y su prórroga es GRAVE: Cuatro meses y 05 días. En el segundo caso, la disposición de conclusión de I.P fue emitida un mes y diez días después del apercibimiento judicial⁹. Pese a ello, se constató que la vulneración de la investigación de este caso simple es GRAVE: 08 meses y 16 días. En el tercer caso, la disposición de conclusión de I.P fue emitida un mes y tres días después del apercibimiento judicial¹⁰. Pese a ello, se constató que la vulneración de la investigación de este caso simple y su prórroga es GRAVE: 04 meses y cinco días. En el cuarto caso, si bien la disposición de conclusión de I.P fue emitida un día después del apercibimiento judicial¹¹, no obstante se constató que la vulneración de la investigación de este caso complejo es MODERADA: un mes y un día. En el quinto caso, la disposición de conclusión de I.P fue emitida veintisiete días después del apercibimiento judicial¹², no obstante se constató que la vulneración de la investigación de este caso simple es GRAVE: Cinco meses y ocho días. En el sexto caso, la disposición de conclusión de I.P fue emitida treinta días después del

⁶ Fecha del apercibimiento: 06/10/2017, fecha de la conclusión: 07/11/2017.

⁷ Fecha del apercibimiento: 06/10/2017, fecha de la conclusión: 02/11/2017.

⁸ Fecha del apercibimiento: 04/12/2017, fecha de la conclusión: 15/01/2018.

⁹ Fecha del apercibimiento: 12/04/2018, fecha de la conclusión: 22/05/2018.

¹⁰ Fecha del apercibimiento: 12/04/2018, fecha de la conclusión: 15/05/2018

¹¹ Fecha del apercibimiento: 12/04/2018, fecha de la conclusión: 13/04/2018

¹² Fecha del apercibimiento: 12/04/2018, fecha de la conclusión: 09/05/2018

apercibimiento judicial¹³, no obstante se constató que la vulneración de la investigación de este caso complejo y su prórroga es GRAVE: Cinco meses y ocho días.

Finalmente, en el año 2018, de un total de 49 procesos comunes (100%) hubo hasta cuatro conminaciones judiciales para que el fiscal concluya su investigación, pero esto no evitó la vulneración grave (1 caso) leve (un caso) y moderada (dos casos), del P.R. Así en el primer caso, si bien la disposición de conclusión fue emitida veintiún días después del apercibimiento judicial¹⁴ esto no evitó que la afectación al P.R de duración del proceso simple sea GRAVE: Cuatro meses y 19 días. En el segundo caso, la disposición de conclusión de I.P fue emitida catorce días después del apercibimiento judicial¹⁵ esto produjo que la afectación al plazo razonable del caso complejo sea LEVE: veinte días. En el tercer caso, si bien la conclusión de la I.P fue emitida catorce días después del apercibimiento judicial¹⁶, esto no impidió la afectación MODERADA del proceso simple con prórroga: Tres meses. En el cuarto caso, si bien la conclusión de la I.P fue presentada trece días después del apercibimiento judicial¹⁷, esto no impidió la vulneración MODERADA del plazo razonable de este proceso simple con prórroga: Tres meses y veinticinco días.

Estos resultados no hacen más que demostrar la inutilidad del mecanismo judicial del apercibimiento judicial de control de plazo respecto a una posible responsabilidad administrativa como forma de control del plazo de la I.P excedido por el señor fiscal en los procesos comunes en el juzgado de Investigación Preparatoria de Imaza, años 2015-2018. Esto por cuanto, si bien es cierto, en algunos casos la disposición de conclusión fue emitida

¹³ Fecha del apercibimiento: 07/05/2019, fecha de la conclusión: 06/06/2019.

¹⁴ Fecha del apercibimiento judicial 04/07/2018, fecha de la conclusión: 25/07/2018.

¹⁵ Fecha del apercibimiento: 08/07/2019, fecha de la conclusión: 22/07/2019.

¹⁶ Fecha del apercibimiento: 06/08/2019, fecha de la conclusión: 22/08/2019

¹⁷ Fecha del apercibimiento: 09/07/2019, fecha de la conclusión: 22/07/2019.

en pocos días de comunicado el apercibimiento judicial, también es cierto que analizado todo el plazo en su conjunto se determinó que esta conminación no evitó la vulneración moderada y en algunos casos grave, del plazo razonable. La explicación de este hecho es sencilla: el apercibimiento judicial opera con posterioridad a la constatación de la vulneración del derecho fundamental, por lo que solo tendría efecto en un contexto periódico de control judicial, realizado antes del vencimiento del plazo o ante la inminencia de su preclusión. En todo caso, mientras esta conminación no vaya acompañada de una consecuencia de orden netamente procesal, que sancione la vulneración del plazo con la caducidad de los actos de investigación realizados durante su exceso (conforme ya lo hemos analizado al redactar la base teórica), seguirá siendo un mecanismo simbólico e inútil durante la I.P controlada por el juez de garantías.

APORTE DE LA INVESTIGACIÓN

a) Aporte teórico: Como primer aporte, la investigación plantea las bases teóricas para una definición de la garantía del plazo razonable desde su posición como derecho fundamental implícito en nuestra Constitución.

Como segundo aporte, y a partir de un desarrollo teórico sobre el rendimiento constitucional de la garantía del plazo razonable, la investigación construye una definición particular de un nuevo instituto procesal, al que denomina "control judicial de oficio" sobre la razonabilidad del plazo violado durante la investigación preparatoria, proponiendo, de *lege ferenda*, su consagración en nuestro derecho adjetivo, como única solución para mitigar la lentitud de la persecución penal durante la investigación preparatoria, y salvaguardar los derechos violados por el exceso en el tiempo de la investigación penal. La propuesta tiene la virtud de revalorizar el papel del juez de investigación preparatoria como garante de los derechos fundamentales dentro de un Estado de Derecho y en dicho contexto, propone la actuación judicial de oficio y la adopción de ciertas consecuencias procesales específicas (como el instituto de la caducidad del plazo de investigación y de la nulidad de los actos de investigación y/o exclusión de las fuentes de prueba obtenidas) que resultan de novedad para el desarrollo teórico de este tema en la dogmática procesal nacional.

b) Aporte práctico: La investigación demostró que en la mayoría de los casos (114 veces de un total de 129 casos, durante los cuatro años de investigación- años 2015-2018; lo que representa un 88.37% del total, según el gráfico 01 de los RESULTADOS), los fiscales no respetan sus propios plazos dispuestos en sus carpetas fiscales, demorándose meses adicionales al vencimiento del plazo para emitir sus disposiciones de conclusión de la investigación preparatoria e inclusive, después de emitidas ellas, de presentar los requerimientos propios de la fase intermedia (acusación y sobreseimiento) lo que en términos concretos importa una prolongación irrazonable de la I.P que vulnera el principio de igualdad de armas y el debido proceso, pues se siguen recabando pruebas de cargo cuando el plazo legal ya se encontraba vencido.

La investigación también fue útil para demostrar la inutilidad del mecanismo judicial del apercibimiento judicial de control de plazo (ver gráfico 03 de la sección de resultados) ,

respecto a una posible responsabilidad administrativa como forma de control del plazo de la I.P. excedido por el señor fiscal en los procesos comunes en el juzgado de Investigación Preparatoria de Imaza, años 2015-2018. Esto por cuanto, si bien es cierto, en algunos casos la disposición de conclusión fue emitida en pocos días de comunicad el apercibimiento judicial, también es cierto que analizado todo el plazo en su conjunto se determinó que esta conminación no evitó la vulneración moderada y en algunos casos grave, del plazo razonable.

CONCLUSIONES

1. La ausencia de un control judicial de oficio afecta el derecho fundamental al plazo razonable durante la fase de investigación preparatoria de los procesos comunes del juzgado de Investigación Preparatoria de Imaza. Así, de los 129 casos analizados durante los años 2015-2018 en dicho juzgado, se detectó que Fiscalía vulneró 114 veces el plazo legal, lo que representa un 88.37% del total de casos estudiados. De este número, se aprecia que 20 fueron violaciones leves (de días hasta un mes) 42, moderadas (de un mes hasta cuatro meses) y 52 fueron violaciones graves (de cuatro meses a más) Las violaciones graves al plazo razonable representan el 40.31% del total de casos estudiados.
2. El rendimiento constitucional de la garantía del derecho fundamental al plazo razonable durante la investigación preparatoria del proceso común, implica que su cumplimiento sea controlado –aun de oficio- por parte del juez de garantías, a través de una audiencia de control, donde deberá resolver el momento en que el plazo fue violado y disponer la nulidad de los actos de investigación y/o exclusión de fuentes de prueba realizadas con posterioridad a dicha vulneración, en aplicación de la Casación vinculante 134-2012, la regla de exclusión prevista en el artículo VIII.2 del TP del CPP y después de efectuar un análisis del caso en base a criterios de legalidad procesal e igualdad de armas, como de exámenes de constitucionalidad y convencionalidad.

3. El control judicial de oficio es un instituto procesal inspirado en el mandato expreso del orden constitucional del Estado de Derecho y de la fuerza vinculante de los tratados internacionales de Derechos Humanos, a través del cual, el juez de garantías, ante la constatación de vulneración del derecho fundamental del plazo razonable, por propia iniciativa lleva a cabo un control de razonabilidad del plazo legal excedido por Fiscalía durante la investigación preparatoria.
4. De acuerdo con el trabajo de campo, el mecanismo del “apercibimiento judicial de responsabilidad” utilizado por el juez de investigación preparatoria, no fue de utilidad para evitar la vulneración del plazo razonable por parte del fiscal durante las investigaciones preparatorias de los años 2015-2018 en el juzgado de Imaza. Esto, por cuanto el apercibimiento judicial opera con posterioridad a la constatación de la vulneración del derecho fundamental, por lo que solo tendría efecto en un contexto periódico de control judicial, realizado antes del vencimiento del plazo o ante la inminencia de su preclusión. En todo caso, mientras esta conminación no vaya acompañada de una consecuencia de orden netamente procesal (conforme a la base teórica), seguirá siendo un mecanismo simbólico e inútil.

RECOMENDACIONES

1.- De *lege ferenda* es preciso incorporar la regulación del control judicial de oficio dentro del título V de la sección I del libro segundo del Código Procesal Penal, conforme al proyecto de ley que se encuentra en el anexo N° 01 de este trabajo, a fin de dar efectivo cumplimiento al compromiso internacional de nuestro Estado, de respetar la garantía fundamental del plazo razonable, contenida en los tratados internacionales de los cuales el Perú forma parte.

2.- Urge realizar un pleno jurisdiccional penal (a nivel del distrito judicial donde se llevó a cabo la investigación) a fin de consolidar una praxis uniforme acerca del proceder del juez de garantías frente a la constatación de la vulneración del P.R por parte de Fiscalía en los procesos comunes. Dicho debate debe efectuarse bajo el estudio previo de los principios, leyes y facultades invocadas en la base teórica de este trabajo.

3.- Deben modificarse ciertas normas del Código Procesal Penal, que reflejan la doctrina del “no plazo” violatoria de las garantías constitucionales, como la última oración del inciso segundo del artículo 144° y la última oración del inciso tercero del artículo 343° del mismo código adjetivo.

4.- A cambio de ello, debe regularse una consecuencia de orden netamente procesal que sancione la vulneración del P.R, como es el instituto de la caducidad, prevista en el artículo 144.1 del CPP y la regla de exclusión prevista en el artículo VIII.2 del TP del mismo código adjetivo, cuestión que también se detalla en la propuesta de ley de este trabajo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 01014-2011-PHC/TC, S. (28 de Junio de 2011). *TRIBUNAL CONSTITUCIONAL*.
<https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/01014-2011-HC.pdf>
- ALMONACID ARELLANO Y OTROS VS CHILE, SERIE C. NRO. 154 (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 26 de septiembre de 2006).
- AMADO RIVADENEYRA, A. (2011). EL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE COMO CONTENIDO IMPLÍCITO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO: DESARROLLO JURISPRUDENCIAL A NIVEL INTERNACIONAL Y NACIONAL. *REVISTA INTERNAUTA DE PRACTICA JURÍDICA*(27), 43-59. Retrieved 30 de ENERO de 2022, from https://www.uv.es/ajv/art_jcos/art_jcos/num27/2Derecho%20al%20plazo%20razonable.pdf
- ARISTOTELES ROMAN ARCE PAUCAR, 00295-2012-PHC/TC (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO 14 de MAYO de 2015).
- BARRAZA GONZALES, A. (01 de ENERO de 2012). *REPOSITORIO ACADEMICO DE LA UNNIVERSIDAD DE CHILE*. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/112753>
- CASO ALMONACID Y OTROS VS CHILE, SERIE C.NRO 154 (CORTE INTERAMERICANA 26 de SEPTIEMBRE de 2006).
- CASO BERROCAL PRUDENCIO, 2915-2004-HC/TC (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO 23 de NOVIEMBRE de 2004).
- CASO GELMAN VS URUGUAY, 221 (CIDH 20 de MARZO de 2013).
- CASO GENIE LACAYO VS NICARAGUA, 10.792 (CIDH 29 de enero de 1997).
- CASO PROFA II, 00025 Y 00026-2005-PI/TC (ACUMULADOS) (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO 15 de 08 de 2006).
- CASO RONALD WINSTON DÍAZ, 618-2005-HC/TC (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO 08 de MARZO de 2005).
- CASO RONALD WINSTON DÍAZ, FUNDAMENTO CATORCE, 618-2005-HC/TC (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO 08 de MARZO de 2005).
- CASO SALAZAR MONROE, fundamento 12, 05350-2009-PHC/TC (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 10 de AGOSTO de 2010).
- CASO SALAZAR MONROE, fundamento 22, 05350-2009-PHC/TC (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 10 de AGOSTO de 2010).
- CASO TRABAJADORES CESADOS VS PERÚ, Serie C. N° 158 (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 24 de noviembre de 2006).

- CASO VELASQUEZ RODRIGUEZ VS HONDURAS, 7920 (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 29 de JULIO de 1988).
- CERNA GARCÍA, R. (26 de FEBRERO de 2015). *SCRIBD*. Retrieved 13 de DICIEMBRE de 2021, from <https://es.scribd.com/document/257038229/CERNA-GARCÍA-Robert-El-derecho-a-ser-juzgado-dentro-de-un-plazo-razonable-pdf>
- CHACON MÁLAGA, STC 3509-2009 (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 19 de Octubre de 2009).
- CONSULTA, 3873-2014 (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 17 de MARZO de 2015).
- CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS, H. (1981). *TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS: 25 años de jurisprudencia 1959-1983*. Madrid: Cortes Generales.
- ESPINO MENDEZ, A. (2014). CONTORL DE LA CONVENCIONALIDAD Y PRISIÓN PREVENTIVA EN EL ORDENAMIENTO PROCESAL PENAL PERUANO. *DE IURE*.
- FERRAJOLI, L. (1995). *Derecho y razón*. (P. A. al, Trad.) Madrid: Trotta.
- GARCÍA TOMA, V. (3 de marzo de 2021). *Benites, Vargas& Ugaz*. Retrieved 23 de abril de 2023, from <https://www.bvu.pe/la-seguridad-juridica/>
- GONZALES BERBESÍ, O. (01 de ENERO de 2014). *REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA*. REPOSITORIO UNIBLIOTECA DIGITAL: <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/52186>
- HUAYTA CARITA, E. (1 de ENERO de 2018). *"CONSECUENCIAS JURÍDICAS PRODUCTO DE LA VULNERACIÓN DEL PLAZO RAZONABLE EN LOS JUZGADOS PENALES DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE AREQUIPA, 2014"*. REPOSITORIO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CÁCERES VELÁSQUEZ: <http://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/1771>
- HUMANOS, M. D. (s/f). *SISTEMA DE PROTECCION DE DD.HH.* Retrieved 18 de DICIEMBRE de 2021, from MINJUS-PERÚ: <https://www.minjus.gob.pe/sistema-de-proteccion-de-dd-hh/>
- LANDA ARROYO, C. (2016). *Convencionalización del Derecho peruano*. Lima: Palestra editores.
- LANDA ARROYO, C. (2016). *CONVENCIONALIZACIÓN DEL DERECHO PERUANO*. Lima: Palestra editores.
- MAIER, J. (1996). *Derecho Procesal Penal*. (Segunda ed., Vol. Tomo I). Buenos Aires: Editores del Puerto.
- MAIER, J. B. (1996). *Derecho Procesal Penal* (Vol. I). Buenos Aires: Editores del Puerto.

- MERCADO MAMANI, J. R. (01 de enero de 2018). *Revista Científica de Investigación Andina*. Sitio Web de la Revista Científica de Investigación Andina: <https://revistas.uancv.edu.pe/index.php/RCIA/article/view/590>
- MIR PUIG, S. (2007). *Derecho Penal. Parte General* (Séptima ed.). Barcelona: Reppertor.
- OEA. (22 de noviembre de 1969). *COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS*. CIDH Web site: <http://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2.htm>
- OEA. (22 de 11 de 1969). DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL. *CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS*. Retrieved 18 de 12 de 2021, from OEA.
- PASTOR, D. (2002). *El plazo razonable en el proceso del Estado de Derecho*. (Primera ed.). Buenos Aires, Argentina: Ad Hoc.
- PASTOR, D. R. (2002). *El plazo razonable en el proceso del Estado de Derecho. Una investigación acerca del problema de la excesiva duración del proceso penal y sus posibles soluciones*. Buenos Aires: Ad Hoc.
- PASTOR, D. R. (01 de 01 de 2004). Acerca del Derecho Fundamental del plazo razonable de duración del proceso penal. *Jueces para la Democracia, Madrid, N° 49.*, 51-76. Retrieved 18 de Octubre de 2021, from Sitio Web de la revista Estudios de la Justicia-Facultad de Derecho de la Universidad de Chile: <https://rej.uchile.cl/index.php/RECEJ/search/search>
- RUBIO AZABACHE, C. (2015). ¿DE OFICIO O A PEDIDO DE PARTE? IDEAS PARA UNA REDEFINICIÓN DEL PODER DE CONTROL DEL JUEZ DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA? (I. LEGALES, Ed.) *NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL COMENTADO. VOLUMEN I.*, 1, 162-181.
- SAMUEL GLEISER KATZ, 5228-2006-PHC/TC (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 15 de febrero de 2007).
- SAN MARTIN CASTRO, C. (1999). *Derecho Procesal Penal* (Vol. I). Lima, Perú: Grijley.
- UNIDAS, N. (23 de marzo de 1976). *ONU*. ONU Web site: <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
- VARGAS YSLA, R. (2016). *El Derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Una visión procesal desde su naturaleza de derecho fundamental*. Lima: RODHAS SAC.
- VARGAS YSLA, R. R. (2016). *El Derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Una visión procesal desde su naturaleza de derecho fundamental*. Lima: Rodhas.
- VELASQUEZ RODRIGUEZ, 7920 (CORTEIDH 29 de Julio de 1988).

ANEXOS

ANEXO 01

PROPUESTA DE LEY QUE REGULA EL CONTROL JUDICIAL DE OFICIO RESPECTO AL PLAZO RAZONABLE DURANTE LA INVESTIGACIÓ PREPARATORIA DEL PROCESO COMÚN

1.- Objeto de la Ley.

La presente ley tiene por objeto regular el instituto procesal del control judicial de oficio por parte del juez de investigación preparatoria como mecanismo de garantía a fin de optimizar el derecho fundamental del plazo razonable en los procesos penales comunes durante su primera etapa, en cumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú y en función a su compromiso de adecuar su normativa interna al respeto de las cláusulas pactadas en dichos tratados.

2.- Modificación de los artículos 144° y 343| del Código Procesal Penal.

Modifíquese el inciso segundo del artículo 144° y el artículo 343° del mismo código adjetivo, normas que de ahora en adelante quedan redactadas de la siguiente manera:

Artículo 144.- Caducidad

1. El vencimiento de un plazo máximo implica la caducidad de lo que se pudo o debió hacer, salvo que la Ley permita prorrogarlo.

2. Los plazos que sólo tienen como fin regular la actividad de Jueces y Fiscales, serán observados rigurosamente por ellos. Su inobservancia constituye falta grave, pasible de responsabilidad disciplinaria, sancionada conforme a las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público,

respectivamente. Además de ello, el incumplimiento no controlado de los plazos legales por parte de los jueces y fiscales a nivel de la investigación preparatoria del proceso común tiene como consecuencia la nulidad de actos de investigación y/o exclusión de fuentes de prueba obtenidos con posterioridad al momento de la vulneración del plazo razonable, conforme a la regla de exclusión prevista en el artículo VIII.2 del TP de este Código.

Artículo 343.- Control del Plazo

- 1. El Fiscal dará por concluida la Investigación Preparatoria cuando considere que ha cumplido su objeto, aun cuando no hubiere vencido el plazo.*

- 2. Si vencidos los plazos previstos en el artículo anterior el Fiscal no dé por concluida la Investigación Preparatoria, las partes pueden solicitar su conclusión al Juez de la Investigación Preparatoria. Para estos efectos el Juez citará al Fiscal y a las demás partes a una audiencia de control del plazo, quien luego de revisar las actuaciones y escuchar a las partes, dictará la resolución que corresponda. La decisión deberá indicar, bajo responsabilidad, el momento en que el plazo razonable fue vulnerado, así como la declaratoria de nulidad de los actos de investigación y/o exclusión de fuentes de prueba realizados y obtenidos con posterioridad a la mencionada vulneración. Para la determinación del momento de la vulneración del plazo razonable, el juez dará preferencia al criterio del plazo legal previsto en los variados supuestos de los incisos 1 y 2 del artículo 342° de este Código. Los criterios de complejidad previstos en el inciso tercero del mencionado artículo, solo son debatibles cuando el fiscal ha solicitado la prórroga y/o declaratoria de complejidad antes del vencimiento del plazo contenido en la disposición de formalización de investigación preparatoria. Caso contrario, opera la caducidad prevista en el inciso 1 del artículo 144° de este Código.*

- 3. Si el Juez ordena la conclusión de la Investigación Preparatoria, el Fiscal en el plazo de diez días debe pronunciarse solicitando el sobreseimiento o formulando acusación, según corresponda. Su incumplimiento por parte del fiscal, acarrea la responsabilidad disciplinaria prevista en el inciso segundo de artículo 144° de este código. Esta prescripción no impide la declaratoria de nulidad de actos de investigación y/o exclusión de fuentes de prueba obtenidos con posterioridad al momento de la vulneración del plazo razonable, conforme a lo dispuesto en el acápite anterior.*

4.- El juez de investigación preparatoria se encuentra obligado, aun de oficio, de convocar a la audiencia prevista en el inciso segundo de este artículo, en el caso que se hayan cumplido los plazos legales sin requerimiento o solicitud de prórroga fiscal y en caso dicha situación no haya sido comunicada por las demás partes procesales. El incumplimiento de esta prescripción por parte del juez, acarrea la responsabilidad disciplinaria prevista en el inciso segundo del artículo 144° de este código.

ANEXO 02**DETALLE DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EN PROCESOS****COMUNES TRAMITADOS EN EL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN****PREPARATORIA-DISTRITO DE IMAZA-AÑO 2015-2016-2017 y 2018**

En este apartado se anexa los cuadros que, bajo la guía de observación de casos, contienen la información sobre los datos correspondientes a los procesos comunes tramitados en el juzgado de Investigación Preparatoria-distrito de Imaza-provincia de Bagua en los años 2015, 2016, 2017 y 2018 y que nos sirvió durante el trabajo de campo a fin de sustentar empíricamente nuestra hipótesis.

DETALLE DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EN PROCESOS COMUNES TRAMITADOS EN EL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA-DISTRITO DE IMAZA-AÑO 2015

NOTA: Los cuadros resaltados en verde son los casos donde existió intervención judicial en torno al plazo. Los casos en amarillo son los casos de vulneración leve del plazo razonable, en donde se excedió el plazo legal de la investigación preparatoria por días o semanas (hasta un mes). Los casos en naranja, son los casos en donde existió una vulneración moderada del plazo razonable (de un mes a cuatro meses). Los casos resaltados en rojo son los casos de evidente y grave vulneración del plazo razonable (más de cuatro meses).

Tabla 5 casos donde existió intervención judicial en torno al plazo Año 2015

Nº	Nº DE EXPEDIENTE	DELITO (S)	Nº DE IMPUTADOS Y DE AGRAVIADOS	CRITERIOS DE COMPLEJIDAD (ART. 342.3 DEL NCPP)	FECHA DE COMUNICACIÓN DE FORMALIZACIÓN	FECHA DE COMUNICACIÓN DE PRÓRROGA	FECHA DE COMUNICACIÓN DE COMPLEJIDAD	FECHA DE COMUNICACIÓN DE CONCLUSIÓN DE N DE INV. PREPARATORIA
1	01-2015-PE	- HURTO AGRAVADO	2 IMPUTADOS/ 1 AGRAVIADO	-----	12/01/2015	30/04/2015	-----	13/07/2015

2	02-2015- PE	- HOMICIDIO CALIFICADO	1 IMPUTADO/ 1 AGRAVIADO	-----	20/01/2015	05/06/2015	-----	10/09/2015 ¹⁸
3	04-2015- PE	- USURPACION AGRAVADA	DOS IMPUTADOS/ UN AGRAVIADO	-----	16/02/2015	-----	-----	16/06/2015
4	05-2015- PE	LESIONES CULPOSAS/HOMICIDIO CULPOSO	UN IMPUTADO/D OS AGRAVIADOS	-----	17/02/2015	24/06/2015	-----	17/09/2015 ¹⁹
5	07-2015- PE	ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES (14)	UN IMPUTADO/U N AGRAVIADO	-----	17/03/2015	19/06/2015	-----	20/10/2015 ²⁰
6	08-2015- PE	HURTO AGRAVADO	TRES IMPUTADOS/ DOS AGRAVIADOS	-----	02/05/2015	-----	-----	19/08/2015 ²¹

¹⁸ Afectación moderada del plazo de un proceso simple con prórroga: Un mes y 20 días.

¹⁹ Vulneración GRAVE del plazo razonable de un proceso simple con prórroga: 06 meses y 14 días.

²⁰ Vulneración moderada del plazo razonable de un proceso simple con prórroga: 01 mes y 03 días

²¹ Vulneración GRAVE del plazo razonable de un proceso simple: 11 meses y ocho días.

	CONTRA LOS	DOS	Cantidad de actos de investigación		
7	09-2015-PE BOSQUES/RESPONSABILIDAD POR INFORMACIÓN FALSA CONTENIDA EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN FORESTAL	IMPUTADOS/ UN AGRAVIADO	06/05/2015	-----	14/05/2015
8	10-2015-PE RESPONSABILIDAD POR INFORMACIÓN FALSA CONTENIDA EN INFORMES/RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO POR OTORGAMIENTO ILEGAL DE DERECHOS	5 IMPUTADOS/ UN AGRAVIADO	18/05/2015	-----	04/12/2015
9	11-2015-PE CONTRA LOS BOSQUES/RESPONSABILIDAD POR INFORMACIÓN FALSA CONTENIDA EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN FORESTAL	DOS IMPUTADOS/ UN AGRAVIADO	15/06/2015	-----	08/06/2017

²² Vulneración GRAVE del plazo razonable de un proceso simple: 4 meses y 28 días.

²³ En este proceso, el requerimiento mixto fue presentado el 04/02/16. Por tal razón, la afectación al plazo razonable de duración del proceso simple es GRAVE de: Cuatro meses y 16 días.

²⁴ Vulneración GRAVE del plazo razonable de duración de una investigación simple: 1 año, siete meses y 24 días.

10	12-2015- PE	RECEPTACIÓN AGRAVADA	DOS IMPUTADOS/ UN AGRAVIADO	-----	17/06/2015	17/06/15 (Solicita prórroga desde la formalización)	-----	03/09/2015
11	13-2015- PE	HOMICIDIO CALIFICADO/SECUESTRO/ VIOLACION DE DOMICILIO/LESIONES	14 IMPUTADOS/ UNA AGRAVIADA	- Cantidad de actos de investigación. - Pluralidad de imputados	19/06/2015	29/10/2015 (declara compleja la investigación)	16/02/2016 (prórroga de caso complejo por ocho meses adicionales a los ya concedidos)	24/05/2017 ²⁵
12	17-2015- PE	RESPONSABILIDAD POR INFORMACION FALSA CONTENIDA EN INFORMES	IMPUTADO/U N AGRAVIADO	-----	15/07/2015	07/12/2015	-----	02/06/2015

²⁵ En este proceso, el requerimiento mixto fue presentado al despacho judicial con fecha 09/01/2018. Por tal razón, la vulneración del plazo razonable de duración del proceso complejo es GRAVE: UN AÑO, dos meses con 24 días.

²⁶ La vulneración del plazo razonable de duración de este proceso simple con prórroga es de 04 meses y 23 días.

		UN IMPUTADO/U N AGRAVIADO	Cantidad de actos de investigación/perici as que comportan nutrida documentación			
13	19-2015- PE	PECULADO DOLOSO		23/07/2015	----- 25/02/2016 (vía de regularización)	18/01/2017 ²⁷
14	20-2015- PE	OMISION, REHUSAMIENTO O DEMORA DE ACTOS FUNCIONALES		24/07/2015	13/11/2015	01/02/2016 ²⁸
15	21-2015- PE	ESTAFA Y FALSEDAD GENÉRICA	Pluralidad de imputados y agraviados	24/07/2015	----- 28/12/2015	14/02/2016 ²⁹
16	22-2015- PE	HOMICIDIO (TENTATIVA)		24/07/2015	13/11/2015	07/01/2016

²⁷ La vulneración del plazo razonable de duración de este proceso complejo es de 09 meses y 25 días.

²⁸ Vulneración leve del proceso simple: Ocho días

²⁹ En este proceso, el requerimiento acusatorio fue presentado al despacho judicial con fecha 27/02/18. Por lo tanto, la vulneración del proceso complejo en este caso es GRAVE: Un año y cinco meses.

17	23-2015- PE	USURPACION DE FUNCIONES	UN IMPUTADO/U N AGRAVIADO	----- 24/07/2015	-----	----- 22/11/2016
18	24-2015- PE	ROBO AGRAVADO	UN IMPUTADO/U N AGRAVIADO	----- 24/07/2015	16/11/2015	14/01/2016
19	25-2015- PE	COBRO INDEBIDO Y PECULADO	TRES IMPUTADOS/ DOS AGRAVIADOS	Cantidad de actos de investigación/perici as que comportan nutrida documentación	05/08/2015 (declarado caso complejo)	11/04/2016 (prórroga de caso complejo)
					08/07/2016 (ampliación por el delito de colusión agravada)	06/10/2017 ³¹
20	26-2015- PE	PECULADO DOLOSO	UN IMPUTADO/ UN AGRAVIADO	----- 11/08/2015	04/12/15	17/02/2016 ³¹

³⁰ En este proceso, el requerimiento de acusación fue comunicado al despacho judicial con fecha 12/07/2017. Por lo tanto, la afectación al plazo razonable de duración del proceso complejo es GRAVE: 5 meses y un día.

³¹ Afectación leve al plazo razonable de duración de un proceso simple con prórroga: 6 días.

21	27-2015- PE	APROPiación ILÍCITA	DOS IMPUTADOS/ UN AGRAVIADO	-----	14/08/2015	24/10/2016 (vía regularizació n)	-----	24/10/2016 ³²
22	28-2015- PE	ROBO AGRAVADO	DOS IMPUTADOS/ CINCO AGRAVIADOS	Pluralidad de imputados y agraviados	13/09/2015	20/01/2016 (vía regularizació n)	02/06/2016 (prórroga de caso complejo)	23/01/2017 ³³
23	29-2015- PE	DEPREDAción DE BOSQUES	TRES IMPUTADOS/ UN AGRAVIADO	-----	31/10/2014	-----	-----	08/04/2015 ³⁴
24	31-2015- PE	HURTO AGRAVADO	DOS IMPUTADOS/ UN AGRAVIADO	-----	14/10/2015	03/03/2016	-----	17/05/2016 ³⁵

³² Afectación grave al plazo razonable de duración de un proceso complejo: 06 meses y 10 días.

³³ Afectación leve del plazo razonable de duración de un proceso complejo: 10 días.

³⁴ Con fecha 27 de marzo del 2015 se requirió al señor fiscal concluya su investigación preparatoria, bajo responsabilidad. Pese a la conminación judicial, existe un mes y ocho días de retardo en concluir la investigación, por tal razón en este caso, la afectación al plazo razonable de duración del proceso simple es MODERADA.

³⁵ Afectación moderada de investigación simple con prórroga: Un mes y tres días.

25	32-2015- PE	RESPONSABILIDAD POR INFORMACIÓN FALSA	UN IMPUTADO/ UN AGRAVIADO	-----	28/10/2015	04/02/2016	-----	11/04/2016
26	33-2015-0	SUSTRACCIÓN DE MENOR	UN IMPUTADO/U N AGRAVIADO	-----	13/11/2015	-----	-----	07/11/2016
27	35-2015- PE	HURTO AGRAVADO	UN IMPUTADO/U N AGRAVIADO	-----	16/11/2015	07/01/2016	-----	07/05/2018

³⁶ Vulneración GRAVE de proceso simple: 07 meses y 24 días.

³⁷ Vulneración GRAVE de proceso simple con prórroga: Un año, once meses y 21 días.

28	36-2015- PE	HOMICIDIO CALIFICADO	DOS IMPUTADOS/ UN AGRAVIADO	-----	16/11/2015	30/03/2016	-----	15/09/2016 ³⁸
29	37-2015- PE	RESPONSABILIDAD POR INFORMACIÓN FALSA	DOS IMPUTADOS/ UN AGRAVIADO	-----	04/12/2015	11/04/2016	-----	20/09/2016 ³⁹
Total: 29 casos de procesos comunes								
Casos de vulneración leve del plazo razonable: 3 casos (10.34% del total)								
Casos de vulneración moderada del plazo razonable: 5 casos (17.2% del total)								
Casos de vulneración grave del plazo razonable: 16 casos (55.17% del total)								
TOTAL, de casos donde se vulneró el plazo razonable: 24 (83% de total)								
Casos donde no se vulneró el plazo razonable: 5 casos (17% del total)								
Casos donde se aplicó el control de oficio: Ninguno (0%)								
Casos donde se invocó el control de plazo por las partes procesales: Ninguno (0%)								

³⁸ Vulneración GRAVE de proceso simple con prórroga: seis meses.

³⁹ Vulneración moderada del plazo razonable de duración de proceso simple con prórroga: Tres meses y 16 días.

Casos donde se aplicó el apercibimiento judicial de responsabilidad fiscal: 1 (3.44% del total) Es de anotar que en ambos casos, el apercibimiento no evitó la vulneración moderada del plazo razonable de la investigación preparatoria.

DETALLE DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EN PROCESOS COMUNES TRAMITADOS EN EL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA-DISTRITO DE IMAZA-AÑO 2016

NOTA: Los cuadros resaltados en verde son los casos donde existió intervención judicial en torno al plazo. Las fechas resaltadas en amarillo son los casos donde existió vulneración leve del plazo razonable (por días a semanas). Las fechas resaltadas en naranja, son los casos donde existió vulneración moderada del plazo razonable (de un mes a cuatro meses) Las fechas resaltadas en rojo son los casos de vulneración grave del plazo razonable (más de cuatro meses)

Tabla 6 casos donde existió intervención judicial en torno al plazo Año 2016

Nº	Nº DE EXPEDIENTE	DELITO (S)	Nº DE IMPUTADOS Y DE AGRAVIADOS	CRITERIOS DE COMPLEJIDAD (ART. 342. 3 DEL NCPP)	FECHA DE COMUNICACIÓN DE FORMALIZACIÓN	FECHA DE COMUNICACIÓN DE COMPLEJIDAD	FECHA DE COMUNICACIÓN DE CONCLUSIÓN DE INV. PREPARATORIA
1	01-2016-PE	RESPONSABILIDAD POR INFORMACIÓN FALSA (DELITO AMBIENTAL)	3 IMPUTADOS 1 AGRAVIADO	-----	04/02/2016	20/07/2016	28/10/2016 ⁴⁰
2	02-2016-PE	-DELITO CONTRA LOS BOSQUES - RESPONSAB. POR INFORM. FALSA	2 IMPUTADOS/ 1 AGRAVIADO	-----	04/02/2016	-----	15/08/2016 ⁴¹

⁴⁰ Afectación leve: 24 días de exceso del plazo de complejidad.

⁴¹ Afectación moderada: Dos meses y once días de exceso del plazo simple.

3	03-2016-PE	- ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENOR DE EDAD	1 IMPUTADOS/1 AGRAVIADO	-----	04/02/2016	-----	-----	31/05/2016 ⁴²
4	04-2016-PE	- PECULADO DOLOSO	TRES IMPUTADOS/UN AGRAVIADO	- Recabar documentos de la UGEL	17/02/2016	-----	17/02/2016 (Declara compleja desde el inicio)	28/09/2016 ⁴³
5	05-2016-PE	RESPONSABILIDAD POR INFORMACIÓN FALSA	TRES IMPUTADOS/UN AGRAVIADO	-----	25/02/2016	20/07/2015	-----	14/10/2016 ⁴⁴
6	06-2016-PE	HOMICIDIO	UN IMPUTADO/ NUEVE AGRAVIADOS	-----	26/02/2016	22/07/2016	-----	23/09/2016 ⁴⁵
7	07-2016-PE	LESIONES LEVES						

⁴² En este proceso, el requerimiento de acusación fue comunicado al despacho judicial con fecha 27/06/2016, por lo tanto, se computa como afectación leve: 23 días de exceso de plazo de la investigación simple.

⁴³ El requerimiento fiscal fue presentado recién con fecha 30/01/2017. Por lo tanto, la afectación al plazo de la investigación compleja es moderada: 3 meses con 13 días.

⁴⁴ Afectación moderada después de la prórroga de proceso simple: Un mes y 20 días.

⁴⁵ En este proceso, el requerimiento de acusación fue comunicado al despacho judicial con fecha 07/02/2017. Por lo tanto estamos ante una afectación leve de un proceso simple con prórroga: 27 días de exceso.

		UN IMPUTADO/UN AGRAVIADO	07/03/2016	08/07/2016	07/11/2017 ⁴⁶
8	09-2016-PE	ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENOR DE EDAD	UN IMPUTADO/UN AGRAVIADO	28/03/2016	19/08/2016
			-----	-----	11/11/2016 ⁴⁷
9	11-2016-PE	OBSTRUCCIÓN DE PROCEDIMIENTO AMBIENTAL	UN IMPUTADO/ UN AGRAVIADO	12/04/2016	29/08/2016 ⁴⁸
10	12-2016-PE	TENTATIVA DE FEMINICIDIO	UN IMPUTADO/ UN AGRAVIADO	02/05/2016	10/02/2017
			-----	-----	15/09/2017 ⁴⁹
11	13-2016-PE	SEIS IMPUTADOS/ UN AGRAVIADO	Cantidad de actos de investigación/Pericia	26/05/2016	06/01/2017

⁴⁶ No existió control judicial pero sí conminación de responsabilidad, pues de oficio, por resolución número CUATRO, de fecha 06 de octubre del 2017, se exhorta al fiscal responsable del caso a fin de que en un plazo de tres días hábiles emita su disposición de conclusión, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control competente. A pesar de ello, existió afectación grave de plazo simple con prórroga: Un año y dos meses.

⁴⁷ Afectación moderada del plazo simple con prórroga: Un mes y 13 días.

⁴⁸ Afectación leve del plazo de una investigación simple: 17 días

⁴⁹ En este proceso el requerimiento acusatorio recién se presentó a mediados de noviembre del 2017. Por lo tanto, existen 13 días de afectación leve de una investigación simple con prórroga.

CONTAMINACION DEL AMBIENTE		s que importaron la revisión de nutrida documentación		24/05/2017 ⁵⁰	
12	14-2016-PE	PECULADO DOLOSO Y COLUSION AGRAVADA	4 IMPUTADOS/UN AGRAVIADO	Cantidad de actos de investigación	26/05/2016 (Se declaró compleja desde el inicio)
13	15-2016-PE	CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD	UN IMPUTADO/UN AGRAVIADO	31/05/2016	26/09/2016
14	16-2016-PE	VIOLACION SEXUAL DE MAYOR DE EDAD	UN IMPUTADO/UN AGRAVIADO	31/05/2016	23/09/2016
					06/01/2017 ⁵²
					06/01/2017 ⁵³

⁵⁰ Afectación grave del plazo de una investigación compleja: 4 meses exactos de retardo.

⁵¹ Mediante RESOLUCIÓN NÚMERO DOS de fecha 06/10/2017 se conmina al fiscal a concluir su investigación bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad. A pesar de ello, existió afectación grave del plazo de una investigación compleja: 09 meses y 05 días.

⁵² Afectación moderada del plazo de una investigación simple con prórroga: Un mes y 06 días de retardo.

⁵³ En este proceso, el requerimiento de acusación fue comunicado al despacho judicial con fecha 06/07/2017. Por lo tanto, la afectación al plazo del proceso simple con prórroga resulta grave: 07 meses con seis días de retardo.

15	19-2016-PE	RESPONSABILIDAD POR INFORMACION AMBIENTAL FALSA	DOS IMPUTADOS/UN AGRAVIADO	-----	06/07/2016	19/10/2016	-----	8/01/2017 ⁵⁴
16	21-2016-PE	VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR	CUATRO IMPUTADOS/UNA AGRAVIADA	Cantidad de actos de investigación	19/07/2016	18/11/2016	20/07/2017 (requiere prórroga de caso complejo, 16 meses en total sin comunicar la complejidad en su oportunidad)	02/11/2017
17	22-2016-PE	VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR	UN IMPUTADO/UN AGRAVIADO	-----	05/08/2016	06/01/2017	-----	19/01/2017 ⁵⁵
18	23-2016-PE	ACTOS CONTRA EL PUDOR	UN IMPUTADO/CUATRO AGRAVIADAS	Pluralidad de agravias	05/08/2016	06/01/2017	-----	19/01/2017 ⁵⁶

⁵⁴ En este proceso, el requerimiento de acusación fue comunicado al despacho judicial con fecha 19/06/2017. Por lo tanto, la afectación al plazo razonable de duración del proceso simple con prórroga es GRAVE: 05 meses y 13 días.

⁵⁵ En este proceso, el requerimiento de acusación fue presentado al despacho judicial con fecha 07/06/2017. Por lo tanto, la afectación al plazo razonable de duración del proceso simple con prórroga es GRAVE: 04 meses y dos días.

⁵⁶ En este proceso, el requerimiento de sobreseimiento fue comunicado al despacho judicial con fecha 20/07/2017. Por lo tanto, la afectación al plazo razonable de duración del proceso simple con prórroga es GRAVE: 05 meses y quince días.

19	24-2016-PE	LESIONES CULPOSAS	UN IMPUTADO/DOS AGRAVIADAS	-----	12/08/2016	16/01/2017	-----	14/03/2017 ⁵⁷
20	25-2016-PE	FALSA DECLARACION EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	UNA IMPUTADA/UN AGRAVIADO	-----	12/08/2016	-----	-----	16/01/2017 ⁵⁸
21	26-2016-PE	PECULADO DOLOSO	DOS IMPUTADOS/ UN AGRAVIADO	Número de actos de investigación/pericia s que comportan la revisión de una nutrida documentación	29/08/2016	-----	29/08/2016 (inició como caso complejo)	16/01/2017 ⁵⁹
22	30-2016-PE	HURTO AGRAVADO	UN IMPUTADO/ DOS AGRAVIADOS	-----	19/09/2016	16/06/2017	-----	29/08/2017 ⁶⁰

⁵⁷ Afectación moderada del plazo razonable de una investigación simple con prórroga: un mes exacto de retardo.

⁵⁸ Afectación moderada del plazo razonable de una investigación simple: Un mes y cinco días.

⁵⁹ Afectación grave del plazo razonable de una investigación compleja: 06 meses y dos días.

⁶⁰ Afectación GRAVE del plazo razonable de una investigación simple con prórroga: Cinco meses y nueve días.

23	36-2016-PE	TENENCIA ILEGAL DE ARMAS	UN IMPUTADO/UN AGRAVIADO	-----	28/09/2016	03/10/2016	-----	06/01/2017
24	37-2016-PE	CONTRA LOS BOSQUES/INFORMACION AMBIENTAL FALSA	DOS IMPUTADOS/UN AGRAVIADO	-----	28/09/2016	-----	-----	06/01/2017 ⁶¹

Nota: elaboración propia

* Fuente: Elaboración propia.

Total: 24 casos de procesos comunes (100%)

Casos de vulneración leve del plazo razonable: 5 (20.83% del total)

Casos de vulneración moderada del plazo razonable: 7 casos (29.16% del total)

Casos de vulneración grave del plazo razonable: 10 casos (41.6% del total)

TOTAL de casos donde se vulneró el plazo razonable de la investigación preparatoria: 22 (91.6% del total)

Casos donde no se vulneró el plazo razonable: 2 casos (8.3% del total)

Casos donde se invocó el control de plazo por las partes procesales: Ninguno (0%)

⁶¹ En este proceso, el requerimiento mixto fue presentado al despacho judicial con fecha 08/06/2017. Por lo tanto, la afectación del plazo razonable de duración del proceso simple es GRAVE: Cuatro meses y veinte días.

Casos donde hubo control judicial de oficio: Ninguno (0%)

Casos donde hubo conminación judicial al fiscal para que concluya su plazo: 2 (8.3%) Es de anotar que, la conminación judicial no evitó la vulneración grave del plazo razonable (más de un año en un caso y 9 meses en el otro caso)

DETALLE DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EN PROCESOS COMUNES TRAMITADOS EN EL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA-DISTRITO DE IMAZA-AÑO 2017

NOTA: Los cuadros resaltados en verde son los casos en donde se aplicó el control judicial de oficio. Los casos en amarillo son los casos de vulneración leve del plazo razonable, en donde se excedió el plazo legal de la investigación preparatoria por días o semanas (hasta un mes). Los casos en naranja, son los casos en donde existió una vulneración moderada del plazo razonable (de un mes a tres meses). Los casos resaltados en rojo son los casos de evidente y grave vulneración del plazo razonable (más de tres meses).

Tabla 7 casos donde existió intervención judicial en torno al plazo Año 2017

Nº DE EXPEDIENTE	DELITO (S)	Nº DE IMPUTADOS Y DE AGRAVIADOS	OTRO CRITERIO DE COMPLEJIDAD (ART. 342. 3 DEL NCPP)	FECHA DE COMUNICACIÓN DE DE FORMALIZACIÓN	FECHA DE COMUNICACIÓN DE PRÓRROGA	FECHA DE COMUNICACIÓN DE COMPLEJIDAD	FECHA DE COMUNICACIÓN DE CONCLUSIÓN DE INV. PREPARATORIA
1 03-2017-PE	- ESTAFA	1 IMPUTADO/3 AGRAVIADOS	-----	09/01/2017	-----	-----	-----

27/09/2017⁶²

2	07-2017-PE	- HURTO AGRAVADO	1 IMPUTADO/ 1 AGRAVIADO	-----	02/02/2017	-----	-----	15/09/2017 ⁶³
3	08-2017-PE	- ESTAFA	4 IMPUTADOS/ 4 AGRAVIADOS	-----	02/02/2017	31/07/2017	-----	15/09/2017 ⁶⁴
4	09-2017-PE	CONTRA LOS BOSQUES/ INFORMACION FALSA CONTENIDA EN INFORMES AMBIENTALES	DOS IMPUTADOS/ UN AGRAVIADA	-----	06/02/2017	-----	-----	14/06/2017 ⁶⁵
5	10-2017-PE	ESTAFA	UN IMPUTADO/ UN AGRAVIADO	-----	10/02/2017	-----	-----	15/09/2017 ⁶⁶

⁶² Vulneración grave del plazo razonable de duración del proceso simple: Cuatro meses y 18 días.

⁶³ Vulneración moderada del plazo razonable de duración del proceso simple: Tres meses y 13 días.

⁶⁴ Vulneración moderada del plazo razonable de duración del proceso simple con prórroga: Un mes y 13 días.

⁶⁵ Vulneración leve del plazo razonable de duración del proceso simple: 08 días.

⁶⁶ Vulneración moderada del plazo razonable de duración del proceso simple: Tres meses y 05 días.

6	11-2017-PE	USURPACIÓN DE FUNCIONES/OSTENTACION DE TITULOS U HONORES/EJERCICIO ILEGAL DE PROFESIÓN	DOS IMPUTADOS/ UN AGRAVIADO	-----	28/02/2017	06/07/2017	-----	15/12/2017 ⁶⁷
7	13-2017-PE	LESIONES LEVES	UN IMPUTADO/ UN AGRAVIADO	-----	10/03/2017	23/06/2017	-----	15/01/2018 ⁶⁸
8	15-2017-PE	LESIONES LEVES	UN IMPUTADO/UN AGRAVIADO	-----	31/03/2017	22/07/2017	-----	15/12/2017 ⁶⁹
9	16-2017-PE	VIOLACION SEXUAL DE MENOR (08)	UN IMPUTADO/UN AGRAVIADO	-----	06/04/2017	-----	-----	25/04/2017 ⁷⁰

⁶⁷ Vulneración moderada del plazo razonable de duración del proceso simple con prórroga: Tres meses y 17 días.

⁶⁸ Mediante resolución número TRES de fecha 04/12/2017 se requirió mediante decreto, que el Ministerio Público presente su requerimiento, bajo responsabilidad funcional. Pese a ello, la vulneración de la investigación de este caso simple y su prórroga es GRAVE: Cuatro meses y 05 días.

⁶⁹ La vulneración del plazo razonable de duración de este proceso simple con prórroga, es moderada: Dos meses y 15 días.

⁷⁰ Mediante resolución número DOS de fecha 12/04/2018, se requiere al fiscal emitir su requerimiento, bajo responsabilidad. Recién con fecha 22 de mayo del 2018 el Ministerio Público presenta requerimiento de acusación. Por lo tanto, en este caso, la vulneración del plazo razonable de duración de la investigación preparatoria simple es GRAVE: 09 meses y 16 días.

10	17-2017-PE	HURTO AGRAVADO	UN IMPUTADO/UN AGRAVIADO	-----	06/04/2017	-----	-----	25/07/2017
11	18-2017-PE	ACTOS CONTRA EL PUDOR	UN IMPUTADO/UNA AGRAVIADA	-----	12/04/2017	20/07/2017	-----	04/01/2018 ⁷¹
12	19-2017-PE	LESIONES GRAVES	DOS IMPUTADOS/UN AGRAVIADO	-----	12/04/2017	-----	-----	04/01/2018 ⁷²
13	20-2017-PE	DESOBEDIENCIA O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD	UN IMPUTADO/ UN AGRAVIADO	-----	26/04/2017	13/06/2017	-----	04/01/2018 ⁷³

⁷¹ Vulneración moderada del plazo razonable del proceso simple con prórroga: Dos meses y 22 días.

⁷² Vulneración grave del plazo razonable de duración de una investigación simple: Cuatro meses y 22 días.

⁷³ Vulneración moderada de la investigación simple con prórroga: Dos meses y nueve días.

14	21-2017-PE	LESIONES CULPOSAS GRAVES	UN IMPUTADO/ UN AGRAVIADO	-----	26/04/2017	-----	-----	31/01/2018 ⁷⁴
15	22-2017-PE	PECULADO DOLOSO POR APROPIACIÓN	UN IMPUTADO/ UNA AGRAVIADA	Número de actos de investigación	08/06/2017 (con declaratoria de complejidad)	-----	-----	10/01/2018 ⁷⁵
16	24-2017-PE ⁷⁶	PECULADO CULPOSO	UN IMPUTADO/ UN AGRAVIADO	-----	14/06/2017	-----	-----	11/12/2017 ⁷⁷

⁷⁴ Vulneración grave del plazo razonable de duración de una investigación simple: Cuatro meses y 09 días.

⁷⁵ El requerimiento fiscal lo presenta conjuntamente con la conclusión.

⁷⁶ Existe apersonamiento de abogado particular.

⁷⁷ Afectación moderada del plazo razonable de duración de una investigación simple: Un mes y 27 días.

17	25-2017-PE	HURTO SIMPLE	DOS IMPUTADOS /UN AGRAVIADO	-----	06/07/2017	04/01/2018	-----	17/06/2018 ⁷⁸
18	26-2017-PE	VIOLACION SEXUAL DE MENOR (14)	UN IMPUTADO/UNA AGRAVIADA	-----	07/07/2017	11/12/2017 (Por sesenta días adicionales)	-----	06/04/2018 ⁷⁹
19	27-2017-PE	USURPACION	UN IMPUTADO/ UN AGRAVIADO	-----	10/07/2017	04/01/2018 (Por sesenta días adicionales)	-----	15/01/2018 ⁸⁰

⁷⁸ La conclusión fue presentada conjuntamente con el requerimiento. Afectación GRAVE del plazo razonable de duración de una investigación simple con prórroga: Cinco meses y un día

⁷⁹ Afectación moderada del plazo razonable de duración del proceso simple con prórroga: Dos meses y 29 días.

⁸⁰ Mediante resolución TRES de fecha 12/04/2018 se requiere al fiscal presente su requerimiento de la fase intermedia, bajo responsabilidad. A pesar de ello, el requerimiento de sobreseimiento fue presentado con fecha 15/05/2018. Por lo tanto, existe una afectación GRAVE al plazo razonable de duración del proceso simple con prórroga: cuatro meses y cinco días

20	28-2017-PE ⁸¹	HOMICIDIO SIMPLE	CINCO IMPUTADOS/ UNA AGRAVIADA	-----	12/07/2017	-----	02/11/2017	13/04/2018 ⁸²
21	29-2017	SECUESTRO	UN IMPUTADO/UN AGRAVIADO	-----	01/08/2017	-----	-----	09/05/2018 ⁸³
22	31-2017-PE	PECULADO DOLOSO	TRES IMPUTADOS/ UN AGRAVIADO	a) cantidad de actos de investigación b) pericias que comportan la revisión de nutrida documentación	15/08/2017 (inicia como investigación compleja)	09/03/2018 (prorroga de caso complejo, por ocho meses)	-----	06/06/2019 ⁸⁴

⁸¹ Solo un imputado se apersonó con su abogado defensor durante la investigación preparatoria, pero no planteó ningún control de plazo.

⁸² Mediante resolución CINCO de fecha 12/04/18 se requiere al fiscal concluya su investigación, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control. Esto no impidió que existiera una afectación moderada al plazo razonable de duración del proceso complejo: Un mes y un día.

⁸³ Mediante resolución 02 de fecha 12/04/2018 se requiere al fiscal concluya su investigación, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control. Esto no impidió que exista una afectación GRAVE al plazo razonable de duración del proceso simple: Cinco meses y ocho días.

⁸⁴ Mediante resolución 04 de fecha 07/05/2019 se requiere al fiscal, presente su requerimiento, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control. Esto no impidió que exista una afectación GRAVE al plazo razonable del proceso complejo y su prórroga: Cinco meses y 21 días.

23	36-2017-PE	LESIONES LEVES	UN IMPUTADO/ UN AGRAVIADO	-----	14/09/2017	-----	03-05-2018 ⁸⁵
24	37-2017-PE	VIOLACION SEXUAL DE MAYOR DE EDAD (TENTATIVA)	UN IMPUTADO/UNA AGRAVIADA	-----	14/09/2017	-----	03-05-2018 ⁸⁶
25	38-2017-PE	HOMICIDIO	5 IMPUTADOS/ UN AGRAVIADO	-----	15/09/2017	-----	08/01/2018 (caso complejo ocho meses) 07-11-2018 ⁸⁷
26	39-2017-PE	PROMOCIÓN O FAVORECIMIENTO AL	UN IMPUTADO/UN AGRAVIADO	-----	13/09/2017	02/03/2018	-----

⁸⁵ Mediante resolución 02 de fecha 19/04/18 se requiere al fiscal concluya su investigación, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control. Esto tampoco impidió la violación moderada del plazo razonable de la investigación simple: Tres meses y 19 días.

⁸⁶ Mediante resolución 02 de fecha 03/05/18 se requiere al fiscal concluya su investigación, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control. Esto no impidió la afectación GRAVE del plazo razonable de la investigación simple: Cuatro meses y nueve días.

⁸⁷ El requerimiento de sobreseimiento fue presentado recién el 15/01/2019. La afectación del plazo razonable para una investigación compleja fue GRAVE: Ocho meses exactos.

TRAFICO ILICITO DE
DROGAS

29/03/2018⁸⁸

27	40-2017-PE	FAKSEDAE IDEOLÓGICA	DOS		27/09/2017			
			IMPUTADOS/UN	AGRAVIADO				
			-----			-----	-----	4/08/2018 ⁸⁹

Nota: elaboración propia

TOTAL: 27 casos (100%)

Casos de vulneración leve del plazo razonable: 1 caso (3.7% del total)

Casos de vulneración moderada del plazo razonable: 12 casos (44.4% del total)

Casos de vulneración grave del plazo razonable: 12 casos (44.4% del total)

TOTAL, de casos donde se vulneró el plazo razonable de la investigación preparatoria: 25 (92.59% del total)

Casos donde no se vulneró el plazo razonable: 2 casos (7.4% del total)

Casos donde se invocó el control de plazo por las partes procesales: Ninguno (0%)

Casos donde hubo control judicial de oficio: Ninguno (0%)

⁸⁸ El requerimiento mixto fue presentado con fecha 11/05/2018. En este caso, la afectación al plazo razonable de duración del proceso simple con prórroga es moderada: Un mes y 28 días.

⁸⁹ Afectación GRAVE de duración del plazo razonable del proceso simple: Cinco meses y 17 días.

Casos donde hubo comminación judicial al fiscal para que concluya su plazo: 6 (22.2%) Es de anotar que, la comminación judicial no evitó la vulneración grave (5 casos) y moderada, del plazo razonable (1 caso).

DETALLE DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EN PROCESOS COMUNES TRAMITADOS EN EL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA-DISTRITO DE IMAZA-AÑO 2018

NOTA: Los cuadros resaltados en verde son los casos donde existió intervención judicial en torno al plazo. Los cuadros en fucsia son los casos que no se contabilizan por haber degenerado el proceso común en otro proceso o haberse remitido a otra jurisdicción. Las fechas resaltadas en amarillo son los casos donde existió vulneración leve del plazo razonable (por días a semanas). Las fechas resaltadas en naranja, son los casos donde existió vulneración moderada del plazo razonable (de un mes hacia adelante) las fechas resaltadas en rojo son los casos de vulneración grave del plazo razonable (más de cuatro meses)

Tabla 8 casos donde existió intervención judicial en torno al plazo Año 2018

Nº DE EXPEDIENTE	DELITO (S)	Nº DE IMPUTADOS Y DE AGRAVIADOS	OTRO CRITERIO DE COMPLEJIDAD (ART. 342.3 DEL NCPP)	FECHA DE COMUNICACIÓN DE FORMALIZACIÓN	FECHA DE COMUNICACIÓN DE PRÓRROGA	FECHA DE COMUNICACIÓN DE COMPLEJIDAD	FECHA DE CONCLUSIÓN DE INV. PREPARATORIA

1	03-2018-PE ⁹⁰	- USURPACIÓN	1 IMPUTADO/ 1 AGRAVIADA	-----	31/01/2018	29/05/2018 (prórroga por sesenta días)	-----	51/07/2018 ⁹¹
2	04-2018-PE	- PECULADO	1 IMPUTADO/ 1 AGRAVIADO	-----	20/02/2018			18/04/2018 ⁹²
3	07-2018-PE	- ABUSO DE AUTORIDAD	2 IMPUTADO/ 1 AGRAVIADO	-----	20/02/2018			25/07/2018 ⁹³
4	08-2018-PE	- HURTO AGRAVADO	2 IMPUTADOS/ 1 AGRAVIADO	-----	02/03/2018			30/11/2018 ⁹⁴

⁹⁰ Apersonamiento de abogado durante la investigación.

⁹¹ El requerimiento de sobreseimiento recién lo presenta el 07/09/2018. Afectación leve del plazo razonable de duración de un proceso simple con prórroga: Siete días.

⁹² El requerimiento de acusación recién se presenta el 15/08/19. Por lo tanto, la afectación al plazo razonable de duración del proceso simple es GRAVE: Un año, un mes y 25 días.

⁹³ El requerimiento de acusación recién se presenta el 09/11/2018, pese al apercibimiento judicial de fecha 04/07/2018. Por tal razón, la afectación al plazo razonable de duración del proceso simple es GRAVE: Cuatro meses y 19 días.

⁹⁴ El requerimiento de acusación recién se presenta el 14/02/2019. Por tal razón, la afectación al plazo razonable de duración del proceso simple es GRAVE: Siete meses y 12 días.

5	09-2018-PE	RESPONSABILIDAD POR INFORMACIÓN FALSA CONTENIDA EN INFORMES DE GESTION AMBIENTAL	- 2 IMPUTADOS/1 AGRAVIADO	-----	14/03/2018	05/07/2018 (prórroga por sesenta días)	06/09/2018 ⁹⁵
6	11-2018-PE	RESPONSABILIDAD POR INFORMACIÓN FALSA CONTENIDA EN INFORMES DE GESTION AMBIENTAL	- 1 IMPUTADO/ 1 AGRAVIADO	-----	19/04/2018	13/08/2018 (Prórroga por 60 días)	26/10/2018 ⁹⁶
7	12-2018-PE	- ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS	- 1 IMPUTADO/1 AGRAVIADA	-----	17/05/2018		16/05/2018 (Fecha de requerimiento de terminación anticipada que terminó en sentencia condenatoria)
8	17-2018-PE	RESPONSABILIDAD POR INFORMACIÓN		-----	07/08/2018		23/04/2019 ⁹⁷

⁹⁵ El requerimiento de acusación recién se presenta el 17/09/2018. La afectación al plazo razonable del proceso simple con prórroga es leve: 3 días.

⁹⁶ El requerimiento de acusación recién se presenta el 30/10/2018. La afectación al plazo razonable del proceso simple con prórroga es leve: Once días.

⁹⁷ La afectación al plazo razonable de duración del proceso simple con prórroga es moderada: Dos meses y 16 días.

	FALSA CONTENIDA EN INFORMES DE GESTION AMBIENTAL	- 2 IMPUTADOS/ 1 AGRAVIADO		18/12/2018 (por sesenta días)	
9	18-2018-PE - RESPONSABILIDAD POR INFORMACIÓN FALSA CONTENIDA EN INFORMES DE GESTIÓN FORESTAL	1 IMPUTADO/ 1 AGRAVIADO	-----	07/08/2018	----- 20/12/2018 ⁹⁸
10	19-2018-PE INFORMACION FALSA CONTENIDA EN INFORMES AMBIENTALES	DOS IMPUTADOS/ UN AGRAVIADO	-----	07/08/2018	----- 22/11/2018 ⁹⁹
11	23--2018-PE TRAFFICO ILÍCITO DE DROGAS	UN IMPUTADO/ UN AGRAVIADO	-----	07/09/2018	----- 15/04/2019 ¹⁰⁰
12	24-2018-PE MINERÍA ILEGAL		-----	04/09/2018	----- 02/10/2018 (Prorroga por ocho
					15/04/2019

⁹⁸ El requerimiento de acusación recién se presenta el 17/01/2019. Por tal razón, la afectación al plazo razonable de duración del proceso simple es moderada: un mes y 10 días.

⁹⁹ El requerimiento de acusación recién se presenta el 14/12/2018. Por tal razón, la afectación al plazo razonable de duración del proceso simple es LEVE: Sete días.

¹⁰⁰ La afectación es moderada: 03 meses y 06 días

DOS IMPUTADOS/ UN AGRAVIADO			meses en declaratoria de complejidad)	
13	27-2018-PE	RESPONSABILIDAD POR INFORMACION FALSA CONTENIDA EN INFORMES AMBIENTALES	UN IMPUTADO/ UN AGRAVIADO	17/09/2018
				24/01/2019 ¹⁰¹
14	28-2018-PE	ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE CATORCE AÑOS	UN IMPUTADO/UNA AGRAVIADO	25/09/2018
				14/02/2019 ¹⁰²
15	30-2018-PE	RESPONSABILIDAD POR INFORMACION FALSA CONTENIDA EN INFORMES AMBIENTALES	DOS IMPUTADOS/UN AGRAVIADO	02/10/2018
				14/02/2019 (Prórroga por sesenta días)
				16/04/2019 ¹⁰³

¹⁰¹ Afectación leve del plazo razonable de duración del proceso simple: siete días.
¹⁰² Afectación leve del plazo razonable de duración del proceso simple: veinte días.
¹⁰³ El mismo día presentan el requerimiento acusatorio. Afectación leve del plazo razonable de duración del proceso simple con prórroga: catorce días.

16	31-2018-PE ¹⁰⁴	RESPONSABILIDAD POR INFORMACION FALSA CONTENIDA EN INFORMES AMBIENTALES	UN IMPUTADO/UN AGRAVIADO	-----	02/10/2018	-----	28/11/2018	(Fecha de requerimiento de terminacion anticipado)
17	32-2018-PE	RESPONSABILIDAD POR INFORMACION FALSA CONTENIDA EN INFORMES AMBIENTALES	UN IMPUTADO/UNA AGRAVIADO	-----	03/10/2018	14/02/2019 (Por sesenta dias	07/05/2019 ¹⁰⁵	
18	34-2018	LESIONES CULPOSAS	UN IMPUTADO/DOSAGRAVIADAS	-----	04/10/2018		07/02/2019 ¹⁰⁶	
19	36-2018-PE	PECULADO DOLOSO	UN IMPUTADO/UN AGRAVIADO	TRÁMITE DE INHIBICIÓN DE OFICIO	17/09/2018			INHIBICIÓN

¹⁰⁴ Con apersonamiento de abogado durante la investigación preparatoria.
¹⁰⁵ Afectación moderada del plazo razonable de duración del proceso simple: un mes y cuatro días.
¹⁰⁶ Afectación leve del plazo razonable de duración del proceso simple: tres días.

20	37-2018-PE	TRATA DE PERSONAS	UNA IMPUTADA/ DOS AGRAVIADAS	-----	16/10/2018	16/06/2019 ¹⁰⁷
21	38-2018-PE	VIOLACION SEXUAL DE MENOR	UN IMPUTADO/ UNA AGRAVIADA	-----	17/10/2018	26/02/2019 ¹⁰⁸
22	42-2018-PE	LESIONES LEVES	UN IMPUTADO/ UNA AGRAVIADA	-----	30/10/2018	06/08/2018 ¹⁰⁹
23	43-2018-PE	RECEPTACIÓN Y HURTO AGRAVADO	CINCO IMPUTADOS/ UN AGRAVIADO	-----	31/10/2018	03/06/2019 ¹¹⁰

¹⁰⁷ Afectación GRAVE del plazo razonable de duración del proceso simple: Cuatro meses exactos.
¹⁰⁸ Afectación leve del plazo razonable de duración del proceso simple: nueve días.
¹⁰⁹ Afectación GRAVE del plazo razonable de duración del proceso simple: Cuatro meses y veinte días.
¹¹⁰ Afectación moderada del plazo razonable de duración del proceso simple: Tres meses y tres días.

44-2018-PE	ROBO AGRAVADO	UN IMPUTADO /UN AGRAVIADO	-----	31/10/2018		11/03/2019 ¹¹¹
24						
45-2018-PE	ESTAFA	UN IMPUTADO/UN AGRAVIADO	-----	31/10/2018	12/03/2019 (Por ocho meses)	22/07/2019 ¹¹²
25						

26	46-2018-PE	USURPACION DE FUNCIONES	UN IMPUTADO/ DOS AGRAVIADOS	-----	31/10/2018	12/03/2019 ¹¹³
27	47-2018-PE	VIOLACIÓN SEXUAL	UN IMPUTADO/ UNA AGRAVIADA	-----	05/11/2018	30/06/2019 ¹¹⁴

¹¹¹ El requerimiento acusatorio se presenta el 20/05/2019. Por lo tanto, la afectación del plazo del proceso simple es moderada: Dos meses y veinte días.

¹¹² Por resolución número TRES de fecha 08/07/2019 se requiere al Ministerio Público concluya su investigación, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control. A pesar de eso, la afectación al plazo razonable del proceso complejo es leve: Veinte días

¹¹³ Afectación GRAVE del plazo razonable de duración del proceso simple: Cuatro meses y 17 días.

¹¹⁴ Afectación moderada del plazo razonable de duración del proceso simple: Tres meses y 25 días.

28	48-2018	ABUSO DE AUTORIDAD	TRES IMPUTADOS/UN AGRAVIADO	-----	05/11/2018	-----	-----	17/03/2019 ¹¹⁵
29	50-2018-PE	USURPACIÓN	UN IMPUTADO/ UN AGRAVIADO	-----	05/11/2018	-----	-----	17/03/2019 ¹¹⁶
30	51-2018-PE	LESIONES LEVES	UNA IMPUTADA/ DOS AGRAVIADOS	-----	05/11/2018	-----	-----	17/03/2019 ¹¹⁷
31	57-2018-PE	HURTO AGRAVADO	UN IMPUTADO/UN AGRAVIADO	-----	24/06/2019	-----	-----	31/07/2019

¹¹⁵ Afectación GRAVE del plazo razonable de duración del proceso simple: Seis meses y 29 días.

¹¹⁶ Afectación leve del plazo razonable de duración del proceso simple: Seis días.

¹¹⁷ Recién el 23/07/2019, el Ministerio Público presenta su requerimiento. Por tal razón, la afectación al plazo razonable de duración del proceso simple es GRAVE: Cuatro meses y 18 días.

32	59-2018-PE	LESIONES	1 IMPUTADO/ DOS AGRAVIADOS	-----	20/11/2018	23/05/2019 ¹¹⁸
33	60-2018-PE	RECEPTACIÓN AGRAVADA	UN IMPUTADO/UN AGRAVIADO	-----	20/11/2018	13/05/2019 ¹¹⁹
34	61-2018-PE	HURTO SIMPLE	DOS IMPUTADOS/UN AGRAVIADO	-----	23/11/2018	10/06/2019 ¹²⁰
35	62-2018-PE	FALSEDAD GENÉRICA	UN IMPUTADO/UN AGRAVIADO	-----	23/11/2018	07/08/2019 ¹²¹

¹¹⁸ Afectación moderada del plazo razonable de duración del proceso simple: Dos meses y tres días.
¹¹⁹ Afectación moderada del plazo razonable de duración del proceso simple: Un mes y 23 días
¹²⁰ El requerimiento de acusación recién se presenta el 18/07/2019. Afectación moderada del plazo razonable de duración del proceso simple: Dos meses y 17 días.
¹²¹ Afectación moderada del plazo razonable de duración del proceso simple: Tres meses y 14 días.

36	63-2018-PE	FAVORECIMIENTO A LA FUGA	4 IMPUTADOS/DOS AGRAVIADOS	INHIBICIÓN DE OFICIO	23/11/2018	-----	INHIBICION
37	65-2018-PE	ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENOR DE EDAD	1 IMPUTADO/1 AGRAVIADA	-----	24/11/2018	23/07/2019	22/08/2019 ¹²²
38	66-2018-PE	PARRICIDIO	4 IMPUTADOS/ 1 AGRAVIADO	-----	01/02/2019		RECI 2020 ¹²³
39	68-2018-PE	ACTOS CONTRA EL PUDOR	2 IMPUTADOS/ 1 AGRAVIADO	-----	27/11/2018	-----	22/07/2019 ¹²⁴

¹²² Por resolución TRES de fecha 06/08/2019 se requiere a Fiscalía concluir su investigación preparatoria bajo apercibimiento de informar a su superior.

¹²³ Afectación GRAVE del plazo razonable de duración del proceso simple: Ocho meses.

¹²⁴ La conclusión fue presentada conjuntamente con el sobreesimiento. Por resolución TRES de fecha 09/07/2019 se requiere al MP concluya su investigación, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control. A pesar de ello, la afectación al plazo razonable de duración del proceso simple con prórroga es moderada: Tres meses y veinticinco días.

40	69-2018-PE	VIOLACIÓN SEXUAL	UN IMPUTADO UN AGRAVIADO	-----	27/11/2018		24/05/2019 ¹²⁵
41	73-2018-PE	ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENOR DE EDAD	UN IMPUTADO/UN AGRAVIADO	-----	14/12/2018		14/11/2019 ¹²⁶
42	74-2018-PE	OMISION DE ACTOS FUNCIONALES / DISCRIMINACIÓN	UN IMPUTADO/ DOS AGRAVIADOS	-----	14/12/2018	24/05/2019 (Prorroga por sesenta días)	14/11/2019 ¹²⁷
43	75-2018-PE	VIOLACION SEXUAL	UN IMPUTADO /UNA AGRAVIADA	-----	17/12/2018	07/05/2019 (Prorroga por 60 días)	10/06/2019 ¹²⁸
44	76-2018-PE	VIOLACIÓN SEXUAL	UN IMPUTADO/ UNA AGRAVIADA	-----	17/12/2018		10/06/2019 ¹²⁹

¹²⁵ Afectación moderada del plazo razonable de duración del proceso simple: Un mes y 27 días.
¹²⁶ Afectación GRAVE del plazo razonable de duración del proceso simple: Siete meses.
¹²⁷ Afectación GRAVE del plazo razonable de duración del proceso simple: Siete meses exactos.
¹²⁸ Afectación moderada del plazo razonable de duración del proceso simple con prórroga: un mes y 23 días.
¹²⁹ Afectación moderada del plazo razonable de duración del proceso simple con prórroga: un mes y 23 días.

07/05/2019
(Prorroga por 60
días)

45	77-2018-PE	HOMICIDIO SIMPLE	UN IMPUTADO/UN AGRAVIADO	17/12/2018	07/05/2019 ¹³⁰
46	78-2018-PE	VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR	UN IMPUTADO/UNA AGRAVIADA	17/12/2018	26/07/2019 ¹³¹
47	79-2018-PE	SECUESTRO	DOS IMPUTADOS/ UN AGRAVIADO	17/12/2018	23/07/2019 ¹³²
48	80-2018-PE	FALSEDAD IDEOLÓGICA	CUATRO IMPUTADOS/UN AGRAVIADO	18/12/2018	06/07/2019 ¹³³

¹³⁰ Afectación leve del plazo razonable de duración del proceso simple: Veinte días.

¹³¹ Afectación moderada del plazo razonable de duración del proceso simple: Tres meses y nueve días.

¹³² Mediante resolución DOS de fecha 09/07/2019 se requiere al fiscal concluya su investigación, bajo apercibimiento de informar a su órgano de control. A pesar de ello, existe afectación moderada del plazo razonable de duración del proceso simple: Tres meses y 06 días.

¹³³ Afectación GRAVE del plazo razonable de duración del proceso simple: nueve meses y 18 días.

49	83-2018-PE	LESIONES CULPOSAS	UN IMPUTADO/UN AGRAVIADO/UN TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE	-----	28/12/2018	08/08/2019 (Prórroga por 60 días)	4-102-2019 ¹³⁴
----	------------	-------------------	--	-------	------------	--------------------------------------	---------------------------

Nota: elaboración propia.

TOTAL: 49 casos (100%)

Casos de vulneración leve del plazo razonable: 11 casos (22.44% del total)

Casos de vulneración moderada del plazo razonable: 18 casos (36.7% del total)

Casos de vulneración grave del plazo razonable: 14 casos (28.57% del total)

TOTAL, de casos donde se vulneró el plazo razonable de la investigación preparatoria: 43 (87.7% del total)

Casos donde no se vulneró el plazo razonable: 2 casos (4% del total)

Casos donde se invocó el control de plazo por las partes procesales: Ninguno (0%)

Casos donde hubo control judicial de oficio: Ninguno (0%)

Casos donde hubo conminación judicial al fiscal para que concluya su plazo: 4 (8.16%) Es de anotar que, la conminación judicial no evitó la vulneración grave del plazo razonable (1 caso).

¹³⁴ Afectación moderada del plazo razonable de duración del proceso simple con prórroga: Cinco meses y catorce días.